



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
HIDALGO

ESCUELA SUPERIOR DE ACTOPAN

LICENCIATURA EN DERECHO

TESIS

**ANÁLISIS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
COMO MEDIDA CAUTELAR VIOLATORIA
DE DERECHOS HUMANOS**

**Para obtener el título de
Licenciado en Derecho**

PRESENTA

Ricardo Moctezuma Álvarez

Director (a)

Dr. Gustavo Yllanes Bautista

Comité tutorial

Dra. Libia Yuritzi Contreras Yttesen

Dra. Carolina Aguilar Ramos

Mtra. Denitza López Téllez

Actopan, Hgo., México, noviembre de 2025



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Escuela Superior de Actopan
Campus Actopan

ESAC/829/2025

Mtra. Ojuki del Rocío Islas Maldonado
Directora de Administración Escolar
Presente

Manifiesto a Usted, que se autoriza la impresión formal del trabajo de investigación que, bajo la dirección del Dr. Gustavo Yllanes Bautista, presenta el pasante en Derecho C. Ricardo Moctezuma Álvarez, en la modalidad de Tesis, cuyo título es: **"Análisis de la Prisión Preventiva como Medida Cautelar violatoria de Derechos Humanos"**; ya que reúne los requisitos del decoro académico a que obligan los reglamentos en vigor para ser discutidos por los miembros del jurado.

Miembro del jurado	Función	Firma de aceptación del trabajo para su impresión formal
Dr. Gustavo Yllanes Bautista	Presidente	
Mtra. Denitza López Téllez	Secretaria	
Dra. Libia Yuritzi Contreras Yttesen	Primer Vocal	
Dra. Carolina Aguilar Ramos	Suplente	

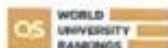
Atentamente
"Amor, Orden y Progreso"
Actopan, Hidalgo a 25 de noviembre de 2025

Mtro. Daniel Alberto Sánchez Cabrera
Director



Carretera México-Laredo Km. 120.5, Comunidad Daxthá, Prolongación Abasolo S/N, Actopan, Hidalgo, México C.P. 42500
Teléfono: 771 7172000 Ext. 50101 y 50102
esc_sup_actopan@uaeh.edu.mx

"Amor, Orden y Progreso"



2025



uaeh.edu.mx

AGRADECIMIENTOS

La finalización de esta tesis representa no solo un logro académico, sino es también el resultado del apoyo, la guía y la paciencia de muchas personas e instituciones a las que extiendo mi más profundo agradecimiento.

En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en específico a la Escuela Superior de Actopan. Mi sincero agradecimiento por haberme brindado el espacio, los recursos y la formación de excelencia que hicieron posible este camino profesional y la realización de la presente tesis.

Un agradecimiento muy especial a mi asesor de tesis, el Dr. Gustavo Yllanes Bautista. Su inagotable paciencia, su invaluable dirección, su rigor académico y su compromiso constante fueron pilares esenciales para la estructura y el desarrollo de este proyecto. Aprecio enormemente su tiempo, sus críticas constructivas y el acompañamiento que me proporcionó en cada etapa.

Extiendo mi agradecimiento con todo respeto y admiración, al Comité Tutorial de este programa. Agradezco a cada uno de sus miembros por sus valiosos comentarios, sus precisas observaciones y sobre todo el tiempo dedicado a revisar mi trabajo. Sus aportaciones enriquecieron significativamente el contenido y la calidad de la investigación.

DEDICATORIA

A mi padre, con mi más profundo respeto y admiración. Tu coraje incansable y cada sacrificio que hiciste a lo largo de los años fueron el motor que me permitió llegar hasta aquí. Eres mi ejemplo más grande de perseverancia y el motivo principal por el que pude abrazar esta oportunidad de preparación profesional. Esta tesis es cosecha de tu esfuerzo, este logro es tan mío como tuyo.

A mi Madre, por tu aliento constante, tu fe inquebrantable en mis capacidades y por ser mi refugio seguro. Tu apoyo incondicional me sostuvo en los momentos de mayor duda y tu amor ha sido la fuerza silenciosa que me impulsó a la meta, por fin lo logramos.

A la Licenciada Azul Vianey Hernández Avendaño, por brindarme su amistad leal, su amor puro, su invaluable compañía, su incondicional apoyo y por recordarme la importancia de la alegría incluso en medio de cualquier situación, eres, sin duda, la persona cuya nobleza de espíritu y calidez humana considero la más grande que he conocido. Gracias por acompañarme en mis triunfos y sobre todo no abandonarme en mis tropiezos, tu amistad y tu afecto siempre los tendré presentes, al igual que cada miércoles de cada semana.

A la Licenciada Yazmin Ángeles Hernández, por la amistad que se convirtió en mi faro más honesto y mi más sabia consejera, la que siempre me dijo la verdad que necesitaba escuchar, no la que me convenía. Te agradezco por retarme a explorar los límites, por impulsarme fuera de mi zona de confort y por cada uno de esos escapes irreverentes que hicieron más liviana la carga. Y gracias, especialmente, por nuestra complicidad única que, sin buscarlo, se ha convertido en una luz tan imprescindible en mi vida.

A cada persona que formó parte de esta travesía universitaria, desde compañeros de aula hasta profesores. Los pequeños detalles, una palabra de ánimo, un café compartido o una ayuda oportuna, fueron gestos que atesoraré y que hicieron de esta aventura un recuerdo invaluable.

ÍNDICE

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO.....	6
1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ)	7
1.1.1. ARTÍCULO 287 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ).....	8
1.1.2. ARTÍCULO 295 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ).....	9
1.1.3. ARTÍCULO 296 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ).....	9
1.1.4. ALCANCE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ) EN TERRITORIO HOY NACIONAL Y NACIDOS EN EL MISMO.....	10
1.1.5. ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ).....	10
1.1.6. ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DA LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ).....	11
1.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE APATZINGÁN DE 1814	12
1.2.1. ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE APATZINGÁN DE 1814.....	13
1.2.2. ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE APATZINGÁN DE 1814.....	14
1.3. REGLAMENTO PROVISIONAL POLÍTICO DEL IMPERIO MEXICANO 1822.....	14
1.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1824.....	15
1.5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1857.....	16
1.6. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1917.....	16
1.6.1. LA REFORMA DE 1948	18
1.6.2. LA REFORMA DE 1985	20
1.6.3. LA REFORMA DE 1993	21

1.6.4. LA REFORMA DE 1996	23
1.6.5. LA REFORMA DEL 2008	24
2. MARCO TEÓRICO.....	26
2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	27
2.1.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA.....	27
2.1.1.1. LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR: ORIGEN Y DISTINCIÓN FUNDAMENTAL CON LA PENA.....	28
2.1.1.2. ORIGEN Y PROPÓSITO HISTÓRICO	30
2.1.1.3. LOS FINES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ACTUAL	31
2.1.2. PRINCIPIOS A SEGUIR PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	32
2.2. LOS MITOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO	33
2.2.1. MITO 1: LA PRISIÓN PREVENTIVA REDUCE LA INCIDENCIA DELICTIVA.....	34
2.2.2. MITO 2: LA PRISIÓN PREVENTIVA DISMINUYE LA INSEGURIDAD CIUDADANA.....	35
2.2.3. MITO 3: LA PRISIÓN PREVENTIVA SE USA CONTRA SUJETOS "PELIGROSOS".....	35
2.2.4. MITO 4: LA PRISIÓN PREVENTIVA GARANTIZA LA REPARACIÓN DEL DAÑO.....	36
3. ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA CON PAÍSES DE LATINOAMÉRICA	36
3.1. LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LATINOAMÉRICA	38
3.1.1. LA ETAPA DEL SISTEMA INQUISITIVO EN LATINOAMÉRICA	39
3.1.2. EL IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO EN LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LATINOAMÉRICA	43
3.1.3. LA NECESIDAD DE CAUTELA SEGÚN LAS REFORMAS ORIGINALES EN LATINOAMÉRICA	45
3.1.4. LA DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS NUEVOS SISTEMAS PENALES ACUSATORIOS LATINOAMERICANOS.....	49
3.1.5. OTRAS MEDIDAS CAUTELARES APARTE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO LATINOAMERICANO	53
4. MARCO NORMATIVO	58
4.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL	59
4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS...	60

4.1.1.1. ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL.....	60
4.1.1.2. ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL.....	62
4.1.1.3. ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL.....	66
4.1.2. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.....	67
4.2. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.....	68
4.2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	69
4.2.2. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.....	70
4.2.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS	71
4.2.4. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS	75
4.2.5. PRONUNCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO.....	78
4.2.5.1. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	78
4.2.5.2. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-DH MÉXICO)	81
4.2.5.3. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA (ONU) ..	83
4.2.5.4. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.....	83
5. CONCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA	87
5.1. PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.....	87
5.1.1. EL GRAN INCREMENTO EN SU USO Y EL CÓMO CUESTIONES COMO LA OFICIALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA PROVOQUE SU USO PRÁCTICAMENTE DE FORMA AUTOMATIZADA.....	87
5.1.2. LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO Y DERECHO HUMANO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA POR LA PRÁCTICA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA.....	88
5.1.3. LAS CONDICIONES EN LAS QUE SON RECLUIDAS PROVISIONALMENTE LOS IMPUTADOS BAJO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA.....	88
5.1.4. EL GRAN IMPACTO DESPROPORCIONADO EN CIERTOS GRUPOS	89
5.1.5. ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.....	89
5.2. NECESIDAD DE CAUTELA DENTRO DE UN PROCESO EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO.....	90
5.3. LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	92
5.4. LA PRISIÓN PREVENTIVA SUPUESTAMENTE REDUCE LA INCIDENCIA DELICTIVA... ..	92
5.5. LA PRISIÓN PREVENTIVA SE UTILIZA SUPUESTAMENTE EN IMPUTADOS	

DE ALTA PELIGROSIDAD	95
5.6. LA PRISIÓN PREVENTIVA GARANTIZA LA REPARACIÓN DEL DAÑO.....	97
5.7. LAS CONSECUENCIAS DEL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	98
5.7.1. CONSECUENCIAS QUE AFECTAN AL IMPUTADO QUE SE LE IMPONE ESTA MEDIDA CAUTELAR.....	98
5.7.2. CONSECUENCIAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA QUE AFECTAN EL SISTEMA PENAL.....	100
5.7.3. CONSECUENCIAS DEL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA QUE AFECTAN A LOS DERECHOS HUMANOS	101
5.7.4. CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL POR EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	102
5.7.5. CONSECUENCIAS EN LA EQUIDAD DEL PROCESO PENAL POR EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA	103
5.8. POSIBLES SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.....	104
5.8.1. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA	105
5.8.2. PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA	106
REFERENCIAS	111

RESUMEN

La presente tesis aborda la problemática de la Prisión Preventiva en el sistema de justicia penal mexicano, analizando su evolución, marco conceptual y aplicación actual en contraste con estándares nacionales e internacionales, el objetivo principal fue determinar la urgencia de la reforma o abolición de la figura oficiosa y la reestructuración de la prisión preventiva justificada para garantizar el respeto a los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.

La metodología empleada fue de carácter documental y analítica, se realizó una exhaustiva revisión de la doctrina, la legislación histórica y vigente, así como el marco normativo internacional, adicionalmente, se desarrolló un análisis de Derecho Comparado al contrastar la figura mexicana con las legislaciones de países clave de Latinoamérica, identificando similitudes en la problemática así como causantes de la misma, se realizó de igual manera el estudio de los pronunciamientos de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la medida cautelar que motivo la realización de la presente tesis.

Los resultados de la investigación revelaron una desproporcionalidad y un uso excesivo de la prisión preventiva en México, transformando una medida cautelar de naturaleza excepcional en la regla general, lo cual contraviene los pactos internacionales de los que el Estado es parte.

En conclusión, se establece que es imperativa la abolición inmediata de la Prisión Preventiva Oficiosa, respecto a la figura justificada, se requiere una reforma profunda que permita su práctica verdaderamente a casos excepcionales y específicos, finalmente, se concluye la necesidad de ampliar y fortalecer el catálogo de medidas cautelares para de esta forma existan alternativas que garanticen el respeto a los Derechos Humanos.

ABSTRACT

This thesis addresses the problem of preventive detention in the Mexican criminal justice system, analyzing its evolution, conceptual framework and current application in contrast with national and international standards. The main objective was to determine the urgency of reforming or abolishing the automatic figure and restructuring justified preventive detention to guarantee respect for human rights and the principle of presumption of innocence.

The methodology employed was documentary and analytical in nature. An exhaustive review of doctrine, historical and current legislation, as well as the international regulatory framework, was carried out. Additionally, a comparative law analysis was developed by contrasting the Mexican figure with the legislation of key Latin American countries, identifying similarities in the problem as well as its causes. Likewise, the pronouncements of international tribunals, such as the Inter-American Court of Human Rights, regarding the precautionary measure that motivated the creation of this thesis were studied.

The research findings revealed a disproportionate and excessive use of pretrial detention in Mexico, transforming an exceptional precautionary measure into the general rule, which contravenes the international treaties to which the State is a party.

In conclusion, the immediate abolition of mandatory pretrial detention is imperative. Regarding justified pretrial detention, a profound reform is required to allow its application only in truly exceptional and specific cases. Finally, the need to expand and strengthen the catalog of precautionary measures is emphasized, so that alternatives exist that guarantee respect for human rights.

INTRODUCCIÓN

La prisión preventiva actualmente como medida cautelar vigente en nuestro sistema penal es la reclusión precautoria de un determinado imputado sujeto a un proceso penal, se aplica con la finalidad de evitar que el acusado no se sustraiga de la acción penal, se salvaguarde tanto la seguridad de los testigos como de la víctima y por último velar por la seguridad de la sociedad.

La medida cautelar de prisión preventiva actualmente prevalece bajo dos formatos o dos tipos, de forma oficiosa y de forma justificada, aquella denominada oficiosa es aplicable de forma automática para todos los delitos que son considerados por el legislador como graves, tal catálogo de delitos se encuentra previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo catálogo que cada que es considerado por las autoridades mexicanas es modificado para incluir conductas que a su criterio merezcan la imposición de prisión preventiva de forma oficiosa.

La otra modalidad de esta medida cautelar es la denominada justificada, se da cuando el Agente del Ministerio Público, aquel encargado de solicitar la aplicación de cualquier medida cautelar en la audiencia inicial, que es el momento procesal oportuno para solicitar la imposición de medidas cautelares a determinado imputado, solicita que este se encuentre recluido de manera precautoria, basando su argumento en la imposibilidad de que otra medida cautelar prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales pudiese dar cumplimiento a los objetivos generales de cualquier medida cautelar, asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso penal, asegurar el bienestar de la víctima, testigos y de la sociedad, al igual que asegurar que el proceso penal se siga sin obstáculo alguno.

La medida cautelar de la prisión preventiva tiene sus fundamentos legales establecidos primeramente en la máxima ley de nuestra nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 18 y 19, además de también encontrarse regulada al igual que el resto de las medidas

cautelares aplicables en el territorio nacional, en el capítulo IV “Medidas Cautelares” del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Pese a que la medida cautelar de la prisión preventiva es una figura jurídica con fundamentos legales sólidos, las críticas a esta figura son realmente significativas, múltiples organizaciones en materia de derechos humanos y diversos juristas han expresado su desacuerdo en el gran uso que tiene esta medida cautelar, entre los principales aspectos que se critican de la prisión preventiva se encuentran:

El excesivo uso de esta medida cautelar, de acuerdo a estadísticas que serán analizadas dentro de esa tesis, podemos deducir que existe una dependencia a esta medida cautelar por parte del sistema penal mexicano, al ser utilizada en gran cantidad pese a ser la medida cautelar más lesiva que permiten las leyes nacionales, afectando así a una gran cantidad de imputados incluyendo a aquellos dentro de sectores marginados o vulnerables de la población.

Otro aspecto criticado es acerca de los derechos humanos, específicamente el de presunción de inocencia, la prisión preventiva consiste en recluir provisionalmente a un determinado imputado privándole en ese momento su libertad, todo esto pese a no existir una sentencia o prueba de que determinado investigado sea el autor de la comisión de un delito, siendo tratado como culpable desde el inicio del proceso penal, situación que va totalmente en contra del principio de presunción de inocencia, derecho humano reconocido por las propias leyes mexicanas y leyes internacionales.

Otro aspecto que es fuertemente criticado es la elevación a la sobre población carcelaria en México a causa del uso de la prisión preventiva, es importante recalcar que la propia legislación mexicana especifica que aquellos reclusos provisionalmente bajo la medida cautelar de la prisión preventiva deberán ser concentrados en espacios distintos aquellos que están compurgando una pena derivada de una sentencia condenatoria, sin embargo, esta situación no se da de esta manera, aquellos reclusos provisionalmente y aquellos reclusos por medio de una sentencia se encuentran reclusos en los mismos espacios lo que genera una sobrepoblación a las instalaciones carcelarias generando una problemática y

un reto a el sistema carcelario mexicano.

Durante el desarrollo de esta tesis se hablará acerca como ha surgido esta figura de la prisión preventiva en los cuerpos jurídicos nacionales, el cómo ha evolucionado, el crecimiento exponencial que ha tenido su uso a lo largo de los años, las múltiples consecuencias que presupone el uso de esta medida cautelar y la percepción que se tiene de esta con base en los ordenamientos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.

1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO

La prisión preventiva es una medida cautelar compleja y bastante controvertida en nuestro sistema penal pues hace que dos puntos choquen entre sí y se contravengan, los derechos humanos y la seguridad pública, actualmente un debate entre juristas que pareciera no tener un fin, ni una verdad absoluta, mucho menos una solución sencilla.

Los fundamentos legales que permiten el uso de la prisión preventiva son principalmente el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que basándose en supuestos específicos permite la reclusión provisional.

Sin embargo, el artículo 19 actual de nuestra máxima ley, al igual que los demás que fundamentan esta figura, han sufrido múltiples modificaciones a lo largo de la historia de México para llegar a la figura que actualmente conocemos y justo de eso trata el presente capítulo, los antecedentes legislativos que ha tenido la prisión preventiva en México.

Durante este capítulo se hará un breve análisis al recopilatorio de cuerpos jurídicos que contengan disposiciones relativas a la prisión preventiva, esto nos servirá para tener un contexto histórico sobre esta medida cautelar y el cómo ha ido evolucionando para así mismo poder analizar y en el capítulo pertinente poder dar una conclusión acerca de cuál es el próximo paso dentro del camino jurídico de la prisión preventiva.

1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ)

Como punto de partida tomaremos la constitución de Cádiz, cuerpo jurídico que fue promulgado “el 19 de marzo de 1812” (Memorica, 2019), si bien es cierto que se trata de un cuerpo normativo que ha sido promulgado durante plena guerra de independencia mexicana que “Inicia el 16 de septiembre de 1810 con el grito de dolores por el cura Miguel Hidalgo y termina el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejercito Trigarante a la Ciudad de México” (Agroasemex, S.A., 2019) no menos cierto es que su validez y alcance es incuestionable debido a que “El 22 de enero de 1809 se expidió un decreto reconociendo a las colonias americanas como parte integrante de la Monarquía” (Torruco, 2013, p. 253) esto para que se envíen representantes a las cortes extraordinarias para que fuese posible la expedición de la propia constitución de Cádiz.

Aunado a esto “El 7 de mayo de 1810 las autoridades instituidas en México prestaron juramento de obediencia y fidelidad al nuevo gobierno español” (Torruco, 2013, p. 253) posteriormente “Las Cortes de Cádiz se instalaron en forma solemne el 24 de septiembre de 1810” (Torruco, 2013, p. 253) 8 días después del inicio de la guerra de independencia de México, a pesar del conflicto armado la constitución de Cádiz se promulga en 1812 aun reconociendo a México como parte de su territorio y es por cual este cuerpo jurídico debe de tomarse en cuenta pues aunque fue efímera, si se le dio su observancia durante la transición que sufrió nuestro territorio nacional de ser colonia de España a ser una república soberana e independiente.

Los artículos de la constitución de Cádiz que se perfilan como antecedente legislativo de lo que hoy en la actualidad es la medida cautelar de prisión preventiva son los siguientes:

1.1.1. ARTÍCULO 287 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ)

El primer artículo de la Constitución de Cádiz que se analizará por contener información acerca de lo que en ese momento sería la aplicación de prisión preventiva en el territorio que actualmente es México sería el 287.

Art. 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho por el que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión. (Constitución Política de la Monarquía Española, 1812)

Primero que nada, hay que tener presente que para ese entonces no es que se impusiera la prisión preventiva como una medida cautelar sino más bien en ciertos casos se concedía la libertad provisional para llevar el proceso penal en libertad en espera de una sentencia, por tanto, de forma general la prisión preventiva era del tipo oficiosa.

Para este momento de la historia ser recluso preventivamente solo bastaba con que existiera información acerca de la comisión de una conducta calificada como delito y tuviese como pena algún castigo corporal de igual manera debía existir alguna acusación directa en contra de determinado imputado y con esos requisitos bastaría para aplicar la prisión de forma preventiva que era la regla general de ese momento.

Pese a que la prisión de forma preventiva era la regla general también es verdad que existía la forma de evitar ser recluso a espera de la resolución del proceso penal y justamente de esa posibilidad o más bien requisito para otorgar la libertad provisional se encontraba regulada por el artículo 295 de la propia constitución de Cádiz.

1.1.2. ARTÍCULO 295 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ)

El artículo 295 de La Constitución Política de la Monarquía Española nos habla acerca de la fianza, una figura bastante importante pues es un antecedente que incluso hoy en día en muchas legislaciones la figura de aplicación de fianza sigue vigente, “Art. 295. No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohíba expresamente que se admita la fianza.” (Constitución Política de la Monarquía Española, 1812).

En aquel entonces la prisión preventiva al solo aplicarse cuando los delitos tengan una pena corporal era una figura que procedía en la gran mayoría de las conductas consideradas como delitos por la legislación de la monarquía española sin embargo había la manera de no ser recluido preventivamente si es que se pagaba una fianza, esa cantidad tendría que ser suficiente para en caso de resultar culpable restituir a la víctima en su afectación por la conducta del acusado, el momento idóneo para realizar el pago de la fianza tendría que ser justo cuando se dé la comunicación entre la autoridad con el investigado acerca de la comisión de una conducta considerada como delito, si era satisfecha la fianza establecida en ese momento ya no tendría que ser llevado el investigado a un centro de reclusión penitenciario salvo que la ley expresamente prohiba que se admita la fianza para determinada conducta.

1.1.3. ARTÍCULO 296 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ)

El artículo 296 complementa el contexto que hemos deducido sobre el cómo funcionaba la prisión preventiva de ese momento, cuando la conducta considerada como delito que se esté investigando en ese momento no tenga una pena corporal, el imputado podía pagar la fianza y evitar ser recluido, de tal forma se le concedía la libertad provisional mientras el proceso penal seguía su curso, “Art. 296. En

cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.” (Constitución Política de la Monarquía Española, 1812).

Pese a que en esa época en su gran mayoría los delitos ameritaban pena corporal, también existían delitos menores los cuales su pena no alcanzaban a una pena corporal y en esos casos se podía pagar la fianza que no era tan elevada para no ser recluso de forma preventiva mientras se llevaba a cabo el proceso penal.

1.1.4. ALCANCE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ) EN TERRITORIO HOY NACIONAL Y NACIDOS EN EL MISMO

El artículo 287 nos menciona al principio “ningún español” y eso podría generarnos la duda acerca de quienes eran considerados ciudadanos españoles y si entre ellos se encontraban los nacidos en lo que hoy es territorio nacional y si la Constitución de Cádiz tenía su respectivo alcance a este territorio, para ello es importante darle observancia a los artículos que nos hablan acerca de quienes eran considerados españoles y que territorio era considerado parte de la monarquía española o sea territorio que jurídicamente eran regidos por la Constitución de Cádiz de 1812.

1.1.5. ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ)

El artículo 5º es el encargado de especificarnos quienes eran considerados ciudadanos en la antigua monarquía española y por tanto se encontraban sujetos al cuerpo jurídico de la Constitución de Cádiz de 1812.

Art. 5º. Son españoles: Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos. Segundo.

Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza. Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía. Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas. (Constitución Política de la Monarquía Española, 1812)

Es importante hacer hincapié en que para ese entonces en la monarquía española existían los esclavos y claramente los esclavos no eran considerados ciudadanos y el alcance legislativo en ese momento no los abarcaba, al menos no en lo relevante a nuestro análisis sobre la aplicación de la prisión preventiva.

Es importante mencionar que pese a la existencia de esclavos y que representaban un gran sector de la población de lo que hoy es territorio nacional no menos cierto es que lo que hoy es México no estaba completamente habitada por esclavos derivado de muchas situaciones como el mestizaje, los libertos y demás formas en los que los esclavos obtenían su libertad.

Derivado de esto en México habitaban muchos ciudadanos y todo este conglomerado de ahora ciudadanos españoles en aquel entonces pasaron directamente a ser regidos por las leyes de la monarquía española, haciendo que la aplicación de la prisión preventiva ya fuera una condición que los acompañaría al ser acusados de un hecho considerado como delito por el cuerpo normativo positivo de aquel entonces.

1.1.6. ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1812 (CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ)

En el artículo décimo específicamente en su párrafo segundo podemos notar que el alcance en cuestión territorial de la Constitución de Cádiz de 1812, “Art. 10. El territorio español comprende...En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Península de Yucatán...” (Constitución Política de la Monarquía Española, 1812), si tenía previsto el territorio que actualmente comprende la

república mexicana y es por tal motivo que pese a ser un ordenamiento jurídico que tiene una efímera presencia por darse dentro de una etapa tan complicada como una guerra por la independencia de un territorio no menos cierto es que sienta las bases y un antecedente de la aplicación de la prisión preventiva en un territorio que hoy es territorio nacional

Justamente uno de los motivos por el cual se toma la Constitución de la Monarquía Española de Cádiz de 1812 es que sirve como inspiración y varios de sus artículos son retomados en las constituciones siguiente, figuras que incluso hoy en día en esencia se conservan dentro de ordenamientos que rigen el actual territorio nacional.

1.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE APATZINGÁN DE 1814

Continuando ahora con el siguiente de los antecesores será un breve análisis sobre los artículos relacionados a la prisión preventiva que se encontraban contenidos en la Constitución Política de Apatzingán de 1814.

Aproximadamente dos años después de la promulgación de la Constitución de Cádiz y aún dentro del periodo correspondiente a la guerra por la independencia de México, el congreso constituyente se establece en la ciudad de Apatzingán en Michoacán y el 22 de octubre de 1814 se promulga una nueva constitución.

Este nuevo ordenamiento jurídico buscaba dejar en claro la intención de separar el territorio nacional de forma independiente de la monarquía española, sin embargo pese a querer ser reconocido como un Estado independiente y totalmente diferente y ajeno a la Monarquía Española, existía una gran similitud entre la constitución de 1812 promulgada en Cádiz y la constitución de 1814 promulgada en Apatzingán para el historiador Toribio Esquivel Obregón “Existen muchos puntos semejantes entre ambos cuerpos jurídicos... indicando con ello la de idea que uno fue centro de inspiración para el otro” (Obregón, 2004, p. 72).

Pese a tener bastantes similitudes en cuanto a estructura y gestiones, es importante analizar el surgimiento de nuevas figuras y principios que hoy rigen el sistema penal mexicano, entre los artículos relativos a nuestra temática que hoy nos ocupa se encuentran los siguientes.

1.2.1. ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE APATZINGÁN DE 1814

El artículo 30 del cuerpo jurídico ya referido, nos hace mención a un principio que incluso hoy en día a más de doscientos años de diferencia tiene una gran relevancia, “Artículo 30: Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado” (Constitución Política de Apatzingán, 1814), el principio de inocencia, mismo que rige el actual sistema penal mexicano y derecho humano con reconocimiento tanto nacional como internacional.

El hecho de que el principio de presunción de inocencia estuviese plasmado en este cuerpo jurídico que fue realizado mucho antes que los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que hoy México es parte, dan a entender la intención del legislador de aquel momento para reconocer y defender los derechos de la parte acusada de un proceso penal.

Lamentablemente para ese momento a más de doscientos años atrás, el ejercicio o práctica de lo estipulado en la constitución y en cualquier cuerpo normativo de esa época no siempre era acorde al contenido de la propia ley, si bien estaba estipulado en los cuerpos jurídicos la presunción de inocencia es sabido que no fue un derecho respetado y defendido hasta mucho tiempo después con la reforma del 2008 que veremos más adelante, sin embargo es importante volver a recalcar la mención del principio de presunción de inocencia en la Constitución de Apatzingán de 1814.

1.2.2. ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE APATZINGÁN DE 1814

El artículo 21 de la Constitución Política de Apatzingán reafirma la competencia y alcance de las leyes para poder especificar los casos en que un acusado pueda ser retenido de forma preventiva “Artículo 21 solo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano” (Constitución Política de Apatzingán, 1814) que siguiendo la tesis de que la constitución de 1814 y la de 1812 seguían puntos similares podemos deducir que no hubo cambios en cuestión de qué delitos ameritaban la negación de la libertad provisional y cuáles delitos se concedía está por el pago de una fianza.

1.3. REGLAMENTO PROVISIONAL POLÍTICO DEL IMPERIO MEXICANO 1822

Posterior a esto surge el nacimiento del primer imperio en México encabezado por el emperador Agustín de Iturbide, pese a que este imperio duró aproximadamente 3 años el cuerpo jurídico que rigió llamado el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano promulgado el 2 de noviembre de 1822 mencionaba en lo relacionado a la prisión preventiva que:

Ningún mexicano podrá ser preso por queja de otro, si no cuando el delito merezca pena corporal y conste en el mismo acto, o el quejoso se obligue a probarlo dentro de 6 días y en su defecto satisfacer al arrestado los atrasos y perjuicios que se le sigan de aquella providencia (Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822)

Es muy importante esto porque da un salto a lo que se venía manejando en la constitución de 1812 y en la constitución de 1814, podemos observar que la prisión preventiva ya no solo se aplicaba con los delitos que merecieran pena corporal

ahora sumándosele a los requisitos se tenía que probar en ese mismo momento que el delito en efecto fue cometido por el acusado o si no tener que probarlo en menos de 6 días y en caso de no poder comprobarlo se tenía que satisfacer al acusado por las consecuencias que hubiere de tener en caso de ser recluso sin serle comprobada la conducta calificada como delito, de cierta forma este ordenamiento jurídico era más protector con el acusado que los dos anteriores.

1.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1824

Continuando con la línea del tiempo nos encontramos que después de ser derrocado el primer imperio en México surge la constitución de 1824, la primera constitución de México como una república independiente, su importancia es tal que es un símbolo del esfuerzo de los mexicanos por tener una república federal y democrática, dividiendo el gobierno en tres poderes de la nación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 tenía en su contenido más de 170 artículos que con ellos regulaba el México naciente y para la temática que hoy nos ocupa podremos resaltar dos principalmente, el artículo 150 y el artículo 151. “Artículo 150: Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba o indicio de que es el delincuente. Artículo 151: Ninguno será detenido solamente por indicios más de sesenta horas “(Constitución política federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824).

Estos dos artículos son bastante importantes estamos hablando de un desuso de la prisión preventiva, en primer momento se nos menciona que para ser detenido por la comisión de un delito debe existir una semiplena prueba o indicio de ser aquel que cometió el delito y posteriormente se nos menciona que en caso de existir tal delito no podrá ser recluso más de sesenta horas, se habla de un plazo y si ese plazo es rebasado y no se han encontrado pruebas que comprueben que el recluso es aquel que cometió una conducta considerada delito debe ser liberado, es un

avance en el sentido de no recluir a alguien de quien no se tiene pruebas sobre la comisión de un delito, es un respeto al derecho de la presunción de inocencia.

1.5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1857

Continuando con el paso de la historia nos encontramos con la constitución de 1857, durante el mandato de Ignacio Comonfort, en lo relacionado al tema es importante destacar el artículo 18, “Artículo 18: La prisión solo procederá para aquellos delitos con pena corporal, En cualquier estado del proceso en que aparezca que al acusado no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo fianza” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1857).

Volvemos a retomar las ideas que se venían tomando en cuenta para los cuerpos normativos anteriores al cuerpo jurídico vigente durante el imperio de México, volviendo a lo de la aplicación de la prisión preventiva para aquellos delitos con pena corporal y aquellos que no tengan esta pena, el acusado debía ser dejado en libertad bajo fianza, aunado a esto se adicionó lo mencionado en el artículo 19: “Artículo 19: Ninguna detención Excederá los 3 días” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1857).

De esta forma el tiempo que se tenía para demostrar que el recluso era partícipe en la comisión de una conducta calificada como delito eran de 3 días, posterior a este periodo debía ponerse en libertad.

1.6. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1917

Posterior a esto con el triunfo de la revolución mexicana de 1910 nace la constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero del mismo año se ha mantenido vigente hasta nuestra actualidad con un sinnúmero de reformas, pero estrictamente hablando es la misma constitución. Prosiguiendo del tema que nos atiende ahora podríamos mencionar el artículo 18 constitucional de aquel entonces: “Artículo 18:

Solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El lugar de esta será distinto y estará completamente separado del que se destínate para la extinción de las penas” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

Vemos que hasta este punto la constante de la procedencia de la prisión preventiva cuando el delito investigado sea acreedor a una pena corporal se mantiene pero además de eso se agrega un detalle bastante peculiar, se menciona que las personas recluidas por prisión preventiva deberán ser recluidos en un sitio distinto y separado de donde se encuentren los reclusos con una sentencia, está situación se supondría que hoy en la actualidad aún sigue vigente, la separación de internos se supone que hoy en día se debería a aplicar porque así lo estipula la constitución actual.

Sin embargo, hoy en día no se cumple esa parte, aquellos recluidos por motivo de la medida cautelar de prisión preventiva y aquellos recluidos por tener una sentencia condenatoria coexisten en los mismos espacios, lo que nos hace suponer que en aquel entonces hace más de un siglo de igual forma no se respetaba del todo esta situación de separar a los internos.

Otro artículo de aquella constitución original de 1917 antes de las reformas que en su momento tenía relación a la prisión preventiva, era el articulo 20 el cual a letra estipulaba:

Artículo 20: En juicio de orden criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías:

I.- Inmediatamente que sea solicitado será puesto en libertad, bajo fianza de hasta diez mil pesos...siempre que determinado delito no merezca ser castigado con una pena mayor de 5 años y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad... (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Aquí de nuevo vamos bajo la tesis no tanto de imponer una medida cautelar de prisión preventiva sino más bien el hecho de otorgar una libertad provisional teniendo como requisitos que el delito no cuente con una pena mayor a 5 años de prisión y dar el pago de una fianza que puede elevarse hasta los diez mil pesos, también en su fracción décima del propio artículo se estipulaba los límites que podía alcanzar la prisión preventiva:

Artículo 20: Fracción X: ... no podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso... en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Aquí hay una situación bastante radical, hoy en día el límite de la medida cautelar de la prisión preventiva es de dos años y este plazo se puede prolongar por motivo de defensa del acusado, aunque originalmente podemos observar que el único límite de tiempo para la prisión preventiva era el límite de la condena del delito que se le acusara, esto quiere decir que si el proceso penal podría dilatarse 10 años y si la pena por el delito era de 10 años solo en ese momento se extinguía la prisión preventiva pues prácticamente ya habría cumplido su pena en caso de ser encontrado culpable aún sin contar con una sentencia, de igual manera esta fracción incluye lo del cómputo del tiempo que se encuentre recluso en caso de ser encontrado culpable, eso quiere decir que el tiempo que se encuentre el acusado en prisión preventiva una vez encontrado culpable será descontado del tiempo de la pena impuesta.

1.6.1. LA REFORMA DE 1948

Para el día 2 de diciembre del año 1948 el Diario Oficial de la Federación publica la reforma de 1948 que en lo relativo a la temática se destaca el artículo 20:

Artículo 20.- En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:

Inmediatamente que lo solicite, será puesto en libertad bajo fianza, que fijará el juez, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito merezca ser castigado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, y sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad...

En ningún caso la fianza o caución será mayor de \$250,000.00, a no ser que se trate de un delito que represente para su autor un beneficio económico o cause a la víctima un daño patrimonial, pues en estos casos la garantía será cuando menos, tres veces mayor al beneficio obtenido o al daño ocasionado. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, reforma de 1948)

En esta reforma se incluye el término medio aritmético como requisito de procedencia para la prisión preventiva, en ese momento dicho término no debería ser mayor a 5 años lo cual de cierta forma ayudó a que no se usara en gran medida la prisión preventiva, de igual manera se cambió el límite máximo de la fianza pasando ahora a ser de doscientos cincuenta mil pesos esto debido a la gran pérdida de valor que sufrió el peso mexicano, de igual manera se agrega en lo relacionado a la fianza el supuesto donde el delito cometido haya generado un beneficio a quien lo cometió o un daño patrimonial para la víctima y en ese sentido la fianza será de un monto mínimo de tres veces esa cantidad, lo cual podría significar una exorbitante cantidad para el acusado que aún no se le comprobaba su relación en el delito investigado y que muchas veces impidió la obtención de la libertad provisional por ser montos excesivamente altos.

1.6.2. LA REFORMA DE 1985

Más de 30 años después se realiza una nueva reforma publicada por el Diario Oficial de la Federación el día 14 de enero de 1985, donde se modificó el artículo 20 el cual ahora decía:

Artículo 20.- En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:

Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional bajo caución... siempre y cuando se trate de una pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva, a disposición de la autoridad judicial

La caución no excederá de la cantidad equivalente a la percepción durante dos años del salario mínimo general...
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, reforma de 1985)

En este nuevo texto reformado se incluían ahora las modalidades del delito y se tomarían en cuenta para la aplicación de la prisión preventiva, de igual manera se cambió el término fianza por caución que sería un término más acorde, al igual que se cambió el monto de la fianza que ahora no podría exceder a dos años de salario mínimo, eso sería de forma general pero existía la posibilidad de duplicar esa caución en los casos que el juzgador considere necesarios, de igual manera se mantuvo la situación acerca de si el delito implica un beneficio para el actor o un detrimento en el patrimonio de la víctima el monto de caución sería de tres veces esa cantidad eso cuando sea un delito intencional y se agregó cuando el delito acontezca de forma imprudencial o sea de forma culposa donde solo bastará como caución que se garanticen la reparación de daños.

1.6.3. LA REFORMA DE 1993

El día 3 de septiembre de 1993 surge una nueva reforma al artículo 20 constitucional que a letra decía:

Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se trate de delitos en que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este beneficio.

El monto y la forma de caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado... El juez podrá revocar la libertad provisional cuando el procesado incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, reforma de 1993)

El legislador para este momento deja de lado el término medio aritmético como característica de procedencia para la prisión preventiva reemplazando esta situación por los delitos que eran considerados graves, lamentablemente el legislador de forma federal no se hizo cargo para describir qué delitos eran considerados graves y dejó esta cuestión en manos de las legislaciones de cada Estado, lo cual aparte de no tener definido qué delitos eran graves, generó que en muchos Estados la prisión preventiva se usara de manera excesiva toda vez que por ejemplo el Estado de Chihuahua consideraba casi en su total mayoría los delitos como graves, también se modificó en cuestión a la caución por lo cual ahora tendría

que ser asequible para el inculcado y se agregó la suspensión de la libertad provisional cuando el acusado no cumpla con sus responsabilidades cuando ya se le hubiera concedido la libertad provisional.

Para este momento entra en gran importancia el codicio de procedimientos penales del Distrito Federal que ya concebía la figura la prisión preventiva de esta manera en su artículo 399:

Artículo 399. Todo inculcado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, si no excede de cinco años el término medio aritmético de la pena privativa de libertad...

En los casos en que la pena del delito imputado rebase el término medio aritmético de cinco años de prisión... el juzgador concederá la libertad provisional en resolución fundada y motivada, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

Que se garantice debidamente, a juicio del juez, la reparación del daño; Que la concesión de la libertad no constituya un grave peligro social; Que no exista riesgo fundado de que el inculcado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y Que no se trata de personas que por ser reincidentes o haber mostrado habitualidad, la concesión de la libertad haga presumir fundadamente que evadirían a la acción de la justicia. (Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, 1993)

El primer párrafo donde se hace mención acerca del término medio aritmético vendría a ser reformado en el año 1993 para estar en concordancia con lo estipulado por la carta suprema pues el artículo 399 se encontraba con una reforma de 1991 pese a eso el resto del artículo permaneció igual, es relevante a destacar de este artículo son las condiciones cuando se otorgue la libertad provisional mismas que en un futuro serían tomadas en cuenta para la aplicación de la prisión preventiva justificada estas tres serían que se garantice la reparación del daño, que no exista un peligro a la sociedad por la libertad del acusado y que no se trate de una persona

reincidente o sea que haya cometido anteriormente un delito y que haga suponer que se sustrajera del proceso penal.

1.6.4. LA REFORMA DE 1996

El 3 de julio de 1996 se publican nuevas reformas al artículo 20 constitucional que ahora pasaría a decir de esta forma:

Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculpado: I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, reforma de 1996)

Con esta nueva reforma nace la prisión preventiva en su forma justificada, en la primera parte de la fracción se versa acerca de la oficiosa por delitos graves y en ese sentido si bien no hubo mayor cambio a la reforma anterior, no menos cierto es que la inclusión de la última parte de la fracción da cabida a la función del Ministerio Público para solicitar se tenga recluido al acusado debido a que su libertad ponga en riesgo la sociedad o el proceso penal y que haya sido anteriormente actor de un delito grave lo que haría pensar la sustracción de la acción penal, cosa que violan el principio de cosa juzgada, no deberíamos ser juzgados dos veces por el mismo

hecho, la comisión de un delito y el pago social de este, debería ser más que suficiente para no volver a ser tomado en cuenta para nuevos problemas jurídicos.

1.6.5. LA REFORMA DEL 2008

Para el día 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la que será la última reforma tomada como antecedente en este trabajo, los principales puntos a observar fueron “Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados”. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 reforma del 2008).

En este primer artículo nos habla acerca de un principio de procedibilidad que es el que para ser procesen la prisión preventiva el delito en cuestión debe tener pena privativa de la libertad, que para este entonces la pena mínima para entrar a prisión era de 4 años 1 día, también nos menciona nuevamente una situación que ya se había analizado antes, los espacios, mismos que deberían ser distintos entre los que cumplían una condena y lo que estaban reclusos por la medida cautelar de la prisión preventiva, situación que a día de hoy no se cumple.

Artículo 19. ... El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de

la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 reforma del 2008)

De igual forma se agranda la explicación acerca de la prisión preventiva justificada dejando la solicitud en manos enteramente del ministerio público el cual también tendrá a su mando el poder justificar porque otra medida cautelar no sería suficiente para garantizar el correcto desarrollo del proceso penal, la seguridad de la sociedad y la no sustracción de la acción penal por parte del acusado, de igual manera en la parte siguiente a dicho precepto legal se nos mencionan los delitos que son considerados graves y a los cuales será procedente la prisión oficiosa, mismo catálogo de delitos que con el paso del tiempo solo se ha hecho más grande y por último se nos menciona en qué casos el juez podría revocar la libertad provisional concedida para volver a hacer uso de la prisión preventiva.

Artículo 20: ...De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa... IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, reforma del 2008)

Por último, el artículo 20 que sería eje central de nuestra temática que nos ocupa, en este artículo en su apartado B, el contenido es a cerca de los derechos de los imputados, la primera fracción versa acerca del derecho humano de la presunción de inocencia, dando una clara controversia con la prisión preventiva, si todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario o como dice la constitución hasta que no existan una sentencia emitida por un juez competente ¿cómo es posible que las personas son reclusas en centros de reinserción social? La prisión preventiva es claramente todo lo contrario a ser tratado como una persona inocente.

En la fracción IX se nos hace mención que por ningún motivo se aplicará la prisión preventiva cuando el fondo del asunto sea meramente monetario o civil y por último en la parte final del artículo se nos hace mención acerca de la duración de la medida cautelar de prisión preventiva que por ningún motivo debe ser superior a dos años salvo sea por la defensa del propio imputado.

Poner un límite de tiempo a la prisión preventiva si significa un avance a comparación de las reformas anteriores que permitían que la medida cautelar de forma indefinida con el único límite que se rebase la pena por el delito que se está investigando, ahora el límite sería de dos años y aunado a eso se mantiene la situación de que el tiempo que un imputado pase recluso será descontado en caso de ser encontrado culpable de la pena impuesta.

De esa forma la prisión preventiva no genera un daño extra o un castigo superior en caso de que la persona reclusa haya sido encontrada culpable, sin embargo, cuando la situación es diferente, cuando el imputado termina siendo encontrado como inocente no hay una compensación por su reclusión y la prisión preventiva terminaría siendo solo un castigo hacia una persona inocente.

2. MARCO TEÓRICO

Durante este marco teórico se proporcionará contextualización conceptual y referencial acerca de la prisión preventiva, misma que sustentara la presente tesis, aportar un marco teórico nos permite sentar bien las bases de la problemática actual en base a la postura crítica de juristas y autores de la doctrina jurídica que es una de las fuentes principales del Derecho.

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Para iniciar el marco teórico se explicará los conceptos básicos que se requieren ser explicados para comprender la figura de la prisión preventiva de una manera clara, poder contextualizar la medida cautelar nos permitirá poder identificar la problemática y sesgo que existe entre la doctrina y la práctica de tal figura jurídica.

2.1.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA

Acerca de las definiciones presentamos las tres siguientes:

Juan Carlos Gutiérrez: “La detención preventiva se refiere a la privación de la libertad que sufre quien no ha sido sentenciado, con objeto de asegurar su presencia durante el proceso penal” (Gutiérrez, 2008, p. 138).

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad:

Medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal. Esta medida cautelar debe aplicarse solo si otras medidas menos intrusivas no son suficientes para asegurar dichos objetivos. (IMCO, 2005)

Raúl Eugenio Zaffaroni: “Se llama ‘prisión preventiva’ a la privación de libertad que

sufre quien aún no ha sido condenado, es decir, quien aún está procesado porque todavía no ha habido sentencia, la que bien puede ser condenatoria como absolutoria” (Zaffaroni, 2007, p. 78).

Derivado de las tres definiciones podemos establecer, que la prisión preventiva es una medida cautelar, la más lesiva en todo caso pues con ella se priva de la libertad personal a determinado imputado sujeto a un proceso penal, comparte fines o propósitos con el resto de medidas cautelares, evitar que el imputado se sustraiga de la acción penal, evitar obstáculos a la investigación dentro del proceso que puedan ser producidos por la libertad del imputado y la protección de la seguridad de la víctima así como de la sociedad en general.

2.1.1.1. LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR: ORIGEN Y DISTINCIÓN FUNDAMENTAL CON LA PENA

Es importante mencionar que en la doctrina la figura de la prisión preventiva no debe ser vista como una pena, como un castigo, sino como lo que es, una medida cautelar es importante mencionar esta distinción porque en la práctica pareciera no poder diferenciarse entre la medida cautelar y la pena.

Para Juan Carlos Gutiérrez:

La prisión preventiva no se considera propiamente una pena; sin embargo, constituye una auténtica privación de uno de los derechos sagrados del hombre: su libertad, la cual frecuentemente se prolonga de forma excesiva. En caso de condena se computa incluyéndola en el tiempo de prisión impuesto, pero en caso de absolución representa una violación irreparable de los derechos humanos. (Gutiérrez, 2008, P. 138)

Es bastante importante la postura que nos comparte Gutiérrez en su obra pues menciona la gran controversia que existe entre la esencia de la figura de prisión

preventiva como medida cautelar y la realidad practica de esta figura jurídica, pues al aplicar esta medida cautelar se vulneran los derechos humanos del imputado en especial el de la libertad personal situación que si se llega a un fallo absolutorio es una transgresión que no tiene una reparación.

Agustín Nicolas Tallarico en su obra muestra las características de la prisión preventiva de la siguiente manera:

Todo encarcelamiento preventivo afecta la libertad personal y la garantía constitucional de la libertad de locomoción o física, propiamente dicha. Por ende, cualquiera sea su naturaleza técnica: arresto, detención, aprehensión o prisión preventiva, sólo es procedente y legítimo, cuando reúna las siguientes condiciones: Excepcional, necesaria, racional y con plazo razonable (Tallarico, 2020, p. 35).

Para Tallarico si es posible una distinción entre la prisión preventiva como medida cautelar y una medida punitiva, esto mediante un carácter de la prisión preventiva que ya conocemos el cual es en su forma justificada, al menos se puede deducir la siguiente idea después de la lectura de cada una de las características que debe tener la prisión preventiva su consideración, excepcional de forma que se haya hecho un examen cubriendo las necesidades específicas de determinado caso y evidenciado que ninguna otra medida cautelar es suficiente para cumplir con los objetivos propios de una medida cautelar, debe de ser necesaria pues no se debe basar solo en presunciones sino más bien en la evidente necesidad de cautela del imputado por ser un peligro para el proceso penal o las partes del propio y racional pues se debe analizar las características de cada caso para demostrar que el hecho que se investiga sea realmente una conducta tan grave que amerite la privación de la libertad y por ultimo con un plazo razonable y no exceder más de lo necesario para poder realizar la investigación y el correcto desarrollo del proceso penal.

2.1.1.2. ORIGEN Y PROPÓSITO HISTÓRICO

Es importante conocer el origen de la figura de la prisión preventiva en la cuna del Derecho para poder identificar cual fue su función desde un principio según los siguientes autores el origen de la cautela y sus propósitos eran los siguientes:

Para Sergio García Ramírez en su libro el sistema penal mexicano: “En el Derecho Romano la prisión no se estableció para castigar a los delincuentes, sino para custodiar a los procesados hasta que se dictara sentencia” (Ramírez, 1993, p. 169)

Para Manuel Abreu Menéndez

La doctrina coincide en la idea de que el hombre primitivo no pensó en construir cárceles para los transgresores de sus leyes, más bien tenía la idea de vengar la ofensa, que investigar las causas que influyen en la comisión del hecho delictuoso. (Menéndez, 1982, p. 52)

Para Carlos García Valdez en su libro Estudios de Derecho Penitenciario:

La prisión desde la etapa primitiva, hasta finales del siglo XVI pasando por el derecho técnico germánico, se ha utilizado fundamentalmente para guardar delincuentes, incluso con ulteriores fines antrofágicos, no como medio represivo en sí y ello es resultado de la concepción que sobre el delito y delincuente tiene la época: El hecho sancionable es un mal y el culpable un *perverus homo* no susceptible de enmienda si no de castigo rápido y capital. En esta situación la cárcel custodia se impone frente a la prisión entendida y aplicada como pena. (Valdez, 1982, p.16)

Estos tres autores en sus respectivas obras nos mencionan algo bastante importante y es que la figura equiparable a la prisión preventiva como medida cautelar surgió primero antes de la figura de la prisión como pena, esto derivado a

que la función era custodiar al acusado en espera de la sentencia que en el origen del tiempo se trataban de penas de torturas e incluso ejecuciones, es importante hacer mención de esto porque la figura de prisión cautelar tenía lugar porque la prisión punitiva no existía y la cuestión ahora es que, al ya existir la figura de prisión como una medida punitiva, ¿Cuál sería la razón de la prisión como medida cautelar? Cuando ya se ha perdido su propósito.

2.1.1.3. LOS FINES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ACTUAL

Pareciera que para conocer los fines y motivos de la prisión preventiva debemos únicamente consultarlos ante la ley, sin embargo, es casi igual de importante conocerlos de forma teórica por medio de la doctrina.

Para Roxin se puede decir que los fines de la aplicación de esta medida cautelar son: “a) asegurar la presencia del imputado; b) garantizar la investigación de los hechos en debida forma (la no obstaculización de la indagatoria), y c) asegurar la ejecución de la sanción pena.” (Roxin, 2003, p. 257)

Para Abraham Martínez Bazán expresa la finalidad de la prisión preventiva de la siguiente manera:

La figura de Prisión Preventiva es una pena de prisión sin sentencia, ante la elevada posibilidad de condena en un juicio y ante un riesgo alto de fuga de la persona imputada de un delito. El proceso de reforma al sistema de justicia penal que tiene como exigencia el respeto a la presunción de inocencia, pero también un fuerte compromiso de combate a la delincuencia y de evitar el famoso efecto de la puerta giratoria, con el que la sociedad vislumbra al sistema de impartición de justicia, que hace mayor el reclamo a nuestras autoridades; por eso, consideramos que en nuestro país se ha abusado y aún en este sistema, se sigue abusando de la prisión preventiva. (Bazan, 2016, p. 130).

Ambas posturas sobre los fines para la imposición de la prisión preventiva son bastante interesantes en un primer momento Roxin nos menciona básicamente lo contenido en la ley salvo el tercer punto en el cual la norma nos menciona la protección de la seguridad de la víctima y la sociedad, para Roxin el tercer punto es asegurar la ejecución de la sanción de la pena y este punto se relaciona bastante con la opinión de Martínez Bazán pues este último menciona que uno de los fines es el fuerte compromiso de combatir la delincuencia y no dar el efecto de puerta giratoria, para la sociedad y para la víctima el hecho de que el presunto artífice del delito se encuentre privado de su libertad presupone una imagen de seguridad, de acción de la ley y de pronta accesibilidad de justicia, lamentablemente mantener esta imagen no quiere decir que se está actuando con justicia y respeto por los derechos de ambas partes del proceso penal, no hay que olvidar que el imputado solo es sospechoso hasta ese momento y no existe prueba suficiente ni sentencia firme que haga que se le pueda negar su derecho a la libertad.

2.1.2. PRINCIPIOS A SEGUIR PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

A consideración de los siguientes autores los principios que se deben atender para poder imponer las medidas cautelares incluida entre ellas la prisión preventiva:

Para Osvaldo Alfredo Gozaini los principios a seguir para imponer una medida cautelar deben ser: “Necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad” (Gozaini, 2014, p.13)

Para José Héctor Carreón Herrera los principios idóneos para imponer una medida cautelar son: “Idoneidad, temporalidad y finalidad” (Herrera, 2017, p. 14)

Es importante mencionar estos principios de forma general y no exclusivamente para el uso de la prisión preventiva, porque debemos entender y visibilizar que existe un gran catálogo de medidas cautelares en la legislación mexicana que cumplen sin problemas con los principios a seguir para imponer una medida cautelar, después de realizar el examen pertinente y el análisis de cada caso particular en la gran mayoría de casos resultara imposible el hecho de que la prisión preventiva fue la medida cautelar más, proporcional, protectora, idónea y con el plazo de tiempo más acorde al proceso penal.

2.2. LOS MITOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO

Como parte final del marco teórico, una vez que ya se han establecidos los parámetros de la prisión preventiva de forma teórica, considero pertinente finalizar el capítulo haciendo un análisis de una de las obras que más critica la figura de la prisión preventiva del autor Guillermo Zepeda Lecuona.

"Los Mitos de la Prisión Preventiva en México" representa una crítica estructural y profunda al uso desmedido de esta medida cautelar en el sistema de justicia penal mexicano. El estudio establece que la prisión preventiva, concebida teóricamente como una medida excepcional, ha sido aplicada en la práctica como la regla general, con consecuencias devastadoras.

La temática central del informe es que el uso excesivo de la prisión preventiva se basa en una serie de mitos que carecen de sustento y que violan principios fundamentales del derecho, en particular la presunción de inocencia. El estudio inicia señalando la dramática realidad de las personas privadas de su libertad sin sentencia: "Muchos de ellos fueron privados de su libertad perdiendo la salud, la familia y el trabajo. Además de indebida, exorbitante e injusta, la prisión preventiva

impone altos costos humanos, sociales y económicos." (Lecuona, 2010, p. 10)

El informe subraya que, al momento del estudio, el 41.5% de la población carcelaria eran presos sin condena, demostrando que la privación de libertad se aplica a una escala masiva, lo cual contraviene instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 9.3) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 7.5), que establecen que la prisión preventiva no debe ser la regla general.

2.2.1. MITO 1: LA PRISIÓN PREVENTIVA REDUCE LA INCIDENCIA DELICTIVA

El primer y más común mito desmentido por la investigación es la creencia de que encarcelar preventivamente a un gran número de personas se traduce en una reducción automática de la criminalidad. El informe argumenta que esta premisa no solo es falsa, sino que desvía la atención del verdadero problema del sistema de justicia: la impunidad.

El estudio demuestra que la incidencia delictiva no disminuye a pesar del crecimiento descontrolado de la población penitenciaria. De hecho, el informe concluye que: "El resultado evidente es que en quince años la población carcelaria en México casi se triplicó, pasando de 86 mil en 1994 a 230 mil en agosto de 2009." (Lecuona, 2010, p.13) Este incremento no ha estado acompañado de una disminución en la delincuencia.

La causa de esta ineficacia radica en la incapacidad de las instituciones para investigar y castigar, no en la falta de detenidos. El informe enfatiza que la prisión preventiva se utiliza como un "espectáculo social" que busca esconder el problema

real: "La abrumadora realidad de que 98.8% de los delitos que se cometen en México no son castigados. A falta de justicia se ofrece castigo." (Lecuona, 2010)

2.2.2. MITO 2: LA PRISIÓN PREVENTIVA DISMINUYE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

El segundo mito refutado se relaciona con la percepción social de seguridad. Se argumenta que las detenciones masivas y el encarcelamiento preventivo funcionan como una respuesta mediática para calmar a la sociedad y recuperar la credibilidad en las instituciones.

Sin embargo, el informe concluye que esta estrategia genera un círculo vicioso de ineficacia y costos sociales. La prisión preventiva no ataca las causas del delito, al centrarse en el castigo y no en la investigación eficaz, permite que la alta impunidad se mantenga, genera desconfianza la mayoría de los ciudadanos no denuncia los delitos (47%) porque lo consideran simplemente una pérdida de tiempo, evidenciando que la prisión preventiva no logra restablecer la confianza pública en el sistema, Es costosa y genera reincidencia, Al saturar las cárceles y someter a personas inocentes (o acusadas de delitos menores) a condiciones inhumanas, se generan efectos criminógenos, haciendo que las prisiones se conviertan en "un entorno insufrible de autogobierno, ocio, violencia y enfermedad." (Lecuona, 2010, p. 15)

2.2.3. MITO 3: LA PRISIÓN PREVENTIVA SE USA CONTRA SUJETOS "PELIGROSOS"

El documento critica que la figura de la prisión preventiva se basa en una medida

de seguridad de carácter predilecto sustentada en "sospechas y prejuicios sobre la peligrosidad" (Lecuona, 2010, p. 16), en lugar de hechos probados. Esto la convierte en una herramienta discriminatoria que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.

La investigación revela que un porcentaje significativo de las personas que permanecieron en prisión preventiva finalmente resultaron ser inocentes, lo cual subraya la injusticia y la ineficacia de la medida:

Un porcentaje significativo de quienes estuvieron privados de la libertad durante todo su proceso resultaron inocentes, por lo que la prisión preventiva fue innecesaria e injusta, además de que no se les indemnizó por... la pérdida de la salud, la familia y el trabajo. (Lecuona, 2010, p. 17)

2.2.4. MITO 4: LA PRISIÓN PREVENTIVA GARANTIZA LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Este mito es desmentido al argumentar que la detención preventiva no solo no garantiza la reparación del daño, sino que a menudo la impide. Al ser encarcelada, la persona pierde ingresos y empleo, lo que provoca su empobrecimiento y el de su familia, volviendo casi imposible cualquier tipo de indemnización o compensación a la víctima.

En la práctica, la prisión preventiva se convierte en una vía en la que: "Ante la presión social, el sistema penal mexicano no está buscando quién lo hizo, sino quién lo pague." (Lecuona, 2010, p. 21)

3. ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA CON PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

La prisión preventiva es concebida como una medida cautelar aplicable por varios sistemas penales alrededor del mundo, una figura jurídica que ya se ha convertido en un tema recurrente a discusión dentro de debates en el ámbito de penal y por supuesto en el ámbito de derechos humanos, esto dentro del interior de México al igual que en un contexto internacional.

Durante el desarrollo de este capítulo el servidor realizará un análisis donde se comparara la medida cautelar de la prisión preventiva en México y la misma en diferentes países del mundo, adentrándonos en el cómo su imposición y regulación podrían llegar a variar según los múltiples contextos en el interior de cada sistema jurídico, al igual que las cuestiones culturales y sociales fungen un papel bastante importante que explica la razón por la cual se practica tanto la figura de la prisión preventiva.

Después de los anteriores capítulos hemos dejado en claro que en México, la prisión preventiva ha sido cuestionada en múltiples ocasiones y ha sido objeto de múltiples críticas, esto derivado al gran uso que ha tenido a lo largo de los últimos años y también por el cómo el catálogo de delitos por los cuales la prisión preventiva de oficio sigue siendo bastante extenso, provocando que para una buena cantidad de delitos la prisión preventiva se aplique incluso hasta de forma automática, derivado a estas situaciones se ha cuestionado acerca del cómo esta figura jurídica genera vulneraciones hacia los derechos humanos, como la libertad, la presunción de inocencia e incluso el debido proceso.

De igual manera en los anteriores capítulos nos hemos percatado del cómo los organismos internacionales han adoptado una clara postura de ir en contra de la prisión preventiva, dejando muy en claro que esta medida cautelar debería sin duda alguna regularse de una mejor manera y su práctica disminuir de forma exponencial.

En este presente análisis no solo se examinarán aquellos países que como México utilizan la prisión preventiva en demasía, es importante de igual manera analizar a aquellos países donde la prisión preventiva es una alternativa que no se aplica con

regularidad y hacer énfasis en aquellas alternativas a esta medida cautelar, de esta forma podríamos dar cumplimiento a uno de los objetivos que tiene este trabajo de investigación que es el lograr dar una alternativa viable a la prisión preventiva en México.

A través de este capítulo se espera lograr un entendimiento profundo sobre la prisión preventiva, su aplicación y el cómo factores sociales y culturales influyen en esta, de igual manera se busca un análisis sobre nuevas alternativas que eviten el vulnereamiento de garantías individuales y cumplan con los objetivos propios de una medida cautelar, externar tal entendimiento al lector es de vital importancia para así poder adoptar medidas que puedan generar una reforma beneficiosa al sistema penal mexicano.

3.1. LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LATINOAMÉRICA

El presente capítulo aborda un análisis histórico-comparativo de la figura de la Prisión Preventiva como medida de cautelar dentro de un proceso penal, examinando su presencia y evolución en los países latinos desde los antiguos sistemas penales inquisitivos hasta la implementación de los actuales sistemas penales acusatorios y orales.

La finalidad de realizar esta comparación es el reconocimiento de que las naciones que conforman Latinoamérica y en particular las analizadas en esta tesis, comparten una similitud jurídico fundamental el uso del sistema romano-germánico o neorromanista.

Esta herencia compartida, es la matriz de la que surgieron tanto las estructuras judiciales como las concepciones procesales que han regido la privación de libertad cautelar a lo largo del tiempo.

Es ideal comparar a México con el resto de países de Latinoamérica porque debemos considerar que han tenido una evolución en su sociedad en general prácticamente a la par, sus sistemas jurídicos de igual forma al ser parecidos sirven como guías unos con otros para lograr satisfacer sus necesidades propias.

Es pertinente realizar el análisis con América Latina además para lograr dos grandes premisas, identificar las raíces del abuso de la prisión preventiva evidenciando que el sistema inquisitivo establecido las bases de esta como regla general que hoy en día no se ha podido contrarrestar por completo y analizar la necesidad de una reforma que regule de mejor manera esta medida cautelar.

El análisis además se basa en una identidad jurídica y lingüística similar entre México y Latinoamérica, el ser herederos de un sistema penal inquisitivo que nos arrastra con su esencia aun en la actualidad y la problemática actual común del uso de la prisión preventiva.

3.1.1. LA ETAPA DEL SISTEMA INQUISITIVO EN LATINOAMÉRICA

Es importante hacer una observación ahora, México como vimos en los antecedentes de la prisión preventiva, sufrió una etapa donde la prisión preventiva era la regla general y en ese momento lo que el imputado podría buscar era la libertad provisional que por su nombre sabemos que se otorga para seguir en libertad determinado proceso penal, en antecedentes analizamos en qué casos se podría evitar la prisión preventiva pero lo importante aquí es mencionar que esta medida cautelar era aplicada prácticamente por oficio y eso provocaba que gran parte de la población carcelaria en México estuvieran bajo este régimen.

Esta situación aconteció de igual manera en los países hermanos de Latinoamérica, en su gran mayoría tuvieron esta etapa donde la medida cautelar de la prisión preventiva estaba siendo utilizada en total desmedida por tanto en todos estos países durante este gran periodo anterior a las reformas que cambiaron el sistema de inquisitivo a acusatorio tenían dentro de su población carcelaria un gran porcentaje de reclusos por forma preventiva y esto se puede observar en la siguiente tabla:

Países	1978-1992
Argentina	51%
Bolivia	90%
Brasil	n/d
Colombia	74%
Costa Rica	47%
Chile	52%
Ecuador	64%
El Salvador	83%
Guatemala	54%
Haití	n/d
Honduras	58%
México	74%
Nicaragua	n/d
Panamá	67%
Paraguay	94%
Perú	71%
R. Dominicana	80%
Uruguay	77%
Venezuela	74%

(Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2013)

Según el CEJA (Centro de Estudios de Justicia de las Américas) este periodo donde la gran mayoría de países latinoamericanos se encontraban con un sistema penal

inquisitivo y donde la prisión preventiva era aplicada por regla general se da entre los años 1978 y 1992, podemos observar en la tabla que varios la gran mayoría de países latinoamericanos estudiados tenían una tasa de la población carcelaria recluida de forma preventiva, es decir que en todos los casos son el equivalente a más del 50% de la población carcelaria e incluso 8 de los países a analizar tienen un porcentaje mayor al 70%, lo que implica que todos estos países tuvieron una etapa donde la medida cautelar de la prisión preventiva era usada de forma alarmante y por tanto decir que tienen un antecedente similar.

Podríamos decir que el sistema inquisitivo en cualquier país de Latinoamérica favorecía en gran medida el uso de la figura de la prisión preventiva y más que ser vista como una medida cautelar a la cual se podía optar era vista como la regla general y su imposición solo se podría evitar en casos específicos y bajo condiciones específicas esto debido a la estructura y los principios que regían el sistema inquisitivo y por los cuales lo que se priorizaba era la investigación de la posible comisión de un delito y esto por encima de los derechos de un determinado acusado.

También es importante mencionar que dentro del sistema penal inquisitivo latinoamericano el juez tenía una gran carga de trabajo pues el desenvolvía un papel central dentro de la investigación al igual que dentro de la resolución del caso penal y como ya hemos podido inferir la enorme prioridad era buscar la verdad e imponer una pena a un determinado infractor se consideraba el objetivo principal, esto provocaba que el hecho de restringir la libertad de un determinado imputado fuera algo bastante común o la regla general para de esta forma poder facilitar la recolección de pruebas y así evitar una posible fuga del acusado que podría poner en peligro el cumplimiento de los objetivos principales del proceso penal, dentro del sistema penal inquisitivo.

El juez al no ser solo aquel que juzgaba dentro del proceso penal sino que también aquel que realizaba actos de investigación generaba por obvias razones un choque de interés o cuando menos una inclinación de la balanza legal que no beneficiaba en nada al acusado, la prisión preventiva al lograr que el acusado estuviera recluido

todo el tiempo evitaba cualquier obstáculo para el proceso de investigación pero de esta forma se provocaba una detención prolongada que existía sin que hubiese condena firme previamente.

Otro factor que tenía sistema penal inquisitivo latino que beneficiaba a la práctica de la prisión preventiva era que la presunción de culpabilidad del acusado se encontraba de forma implícita, teóricamente la presunción de inocencia ya se encontraba establecida, pero en la práctica del proceso penal sucedía todo lo contrario, pues el acusado era tratado con prejuicios que implicaban una gran sospecha desde el inicio del proceso, basándose en la premisa de que existía evidencia suficiente para desarrollar una investigación también debería ser razón suficiente para recluir preventivamente al acusado.

Una característica del sistema inquisitivo latino de igual manera era la clara falta o por lo menos deficiencia en las garantías procesales, figuras como el debido proceso o cualquier otro derecho del imputado en ese momento no se encontraban tan desarrollados o implementados como lo están hoy en día con los sistemas penales acusatorios, la falta de garantías procesales al igual que la ineficiencia de una defensa adecuada al acusado porque no hay que olvidar que en el sistema inquisitivo las fiscalías quienes representaban a la víctima fungían como servidores públicos con un monopolio dentro del sistema penal con suficiente poder que dejaban casi sin nada que hacer para los defensores de ese sistema y esto provocaba que las practicas violatorias de derechos del acusado se usaran de forma exponencial como lo fue la prisión preventiva. La duración del proceso de investigación y recolección de pruebas tendían a ser bastante extensos y el proceso penal en general bastante largo, durante todo este periodo en el sistema inquisitivo latino el acusado se encontraba recluido de forma preventiva ya que el enfoque estaba en asegurar la recolección de pruebas sin obstaculización por parte del imputado.

Claramente el sistema inquisitivo en cualquier país de Latinoamérica era un sistema que se estaba quedando obsoleto, que violentaba derechos de las partes y no

cumplía de forma eficiente con los propósitos que debería tener cualquier sistema penal decente, el uso excesivo de la prisión preventiva es solo una de las múltiples causas por las cuales en México y en Latinoamérica se optó por un sistema acusatorio.

La prisión preventiva al ser una medida cautelar que se utilizaba por defecto en los sistemas penales inquisitivos latinos, se debió regular de mejor manera, para evitar que esta práctica violatoria de derechos humanos se utilizara en menor medida, hay que recalcar que todos los países analizados eran parte de algún convenio internacional que recomendaba una mejor regulación a la prisión preventiva, de ahí se partió a que en el nuevo sistema acusatorio la prisión preventiva tuviera límites y su uso fuese de forma excepcional, dándole el menor uso posible o al menos ese era el objetivo al reformar los sistemas penales latinos.

3.1.2. EL IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO EN LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LATINOAMÉRICA

Derivado de que el proceso penal inquisitivo latino implicaba claras violaciones a los derechos humanos, además de una clara ineficiencia en la persecución penal, llega a América Latina la instauración de un nuevo sistema penal acusatorio que suponía corregir las múltiples deficiencias del proceso penal inquisitivo.

La transición en América latina llevo un par de años, aunque al final el cambio a un sistema penal acusatorio finalmente terminaría por alcanzarnos a todos como podemos observar en la tabla siguiente

País	Referencia normativa y Fecha
Argentina ³	Ley N° 11922. CPP de la Provincia de Buenos Aires, vigente desde septiembre de 1998.
Bolivia	Ley N° 1970. Código de Procedimiento Penal 1999. Entró en vigencia en el 2000.
Chile	Ley N° 19.696. Publicada el 12 de octubre de 2000 en el Diario Oficial y vigente desde diciembre del mismo año.
Colombia	Ley N° 906. Código de Procedimiento Penal promulgado en 2004, vigente desde el 2005.
Costa Rica	Ley N° 7594. Código Procesal Penal de Costa Rica, del 10 de abril de 1996 y entró en vigencia en 1998.
Ecuador	Ley N° 000. RO/ Sup 360 de 13 de enero del 2000, vigente desde el 2001.
El Salvador	Decreto Legislativo N° 904 de 1996. Vigente desde 1998.
Guatemala	Decreto N° 51-92. Código Procesal Penal de 1992, que entró en vigencia en 1994.
Honduras	Decreto N° 9-99-E que establece el Código Procesal Penal de 1999. Entró plenamente en vigencia en 2002.
México	Reforma Constitucional de 18 de junio 2008.
Nicaragua	Ley N° 406. Código Procesal Penal de 2001, vigente desde 2002.
Panamá	Ley N° 63. Código Procesal Penal del 2 de julio de 2008, que entraba en vigencia gradual el 1 de septiembre de 2009 y fue postergado a septiembre de 2011.
Paraguay	Ley N° 1286/98. Código Procesal Penal, que entró en plena vigencia en el 2000.
Perú	Decreto Supremo N° 005-2003-JUS, de julio de 2004 y que entró en vigencia en 2006.
República Dominicana	Ley N° 76-02. Código Procesal Penal, de 2002 y que entró en vigencia en 2004.
Venezuela	Código Orgánico Procesal Penal de 1998, vigente desde 1999.

(Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2013)

El sistema acusatorio en toda Latinoamérica buscó hacerles frente a las críticas del sistema inquisitivo, atacando puntos bastante importantes, la incorporación o aplicación de mejoras en relación a la defensa del acusado, la distribución de tareas del proceso a distintas figuras e instituciones, el cambio de la modalidad de juicio que ahora pasaría a ser de forma oral y el punto que a nosotros más nos concierne, la regulación y aplicación de la prisión preventiva.

La prisión preventiva con la entrada del nuevo sistema acusatorio pasa a ser una medida cautelar con una mayor regulación y que en teoría sería más complicado

poder aplicar tal figura en un proceso penal, con las reformas aplicadas a el sistema penal de cada país la prisión preventiva ahora tenía que observar ciertos puntos para su aplicación.

3.1.3. LA NECESIDAD DE CAUTELA SEGÚN LAS REFORMAS ORIGINALES EN LATINOAMÉRICA

Para las reformas originales de cada país existieron algunos puntos que dejaron claros que justificarían la necesidad de cautela, con el tiempo estos puntos serian llamados causas de procedibilidad de la prisión preventiva, dos puntos que estuvieron presentes en casi todos los nuevos sistemas penales acusatorios latinos fueron, el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación penal.

La necesidad de cautela al partir estos dos puntos primeramente en las reformas originales de los códigos penales de cada país justificaría el hecho de que se recluyera a determinado acusado en un proceso penal, pues al existir el peligro de fuga lo que busco la reforma es proteger la efectividad del sistema penal que era en caso de ser hallado culpable el acusado aplicar una sentencia condenatoria, si el acusado se fugaba en ese sentido es imposible aplicar la sentencia.

En el punto sobre el peligro para la investigación, la explicación es similar, si la no reclusión del acusado genera un obstáculo a la investigación, su libertad alteraría la efectividad del proceso penal y de esta forma el alcance de la versión más acercada a los hechos sería difícil de apreciar por el juzgador y entonces se vicia el proceso penal.

Los puntos sobre el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación penal en el cuerpo normativo mexicano se toman en cuenta en el artículo 19 constitucional (En la reforma del 2008) el cual recordemos que a letra decía: “Artículo 19: El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación...” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, reforma del 2008)

En ese sentido se da atención al punto de riesgo de fuga cuando el legislador hace hincapié como punto de procedibilidad el poder garantizar la comparecencia del imputado a juicio, si se garantiza la comparecencia por parte del imputado por lógica esté no se podrá fugar, en lo relacionado al punto sobre la obstaculización de la investigación el legislador mexicano utiliza otras palabras pero da a entender la misma idea, la prisión preventiva procederá cuando otras medidas cautelares no garanticen el desarrollo de la investigación, de esta forma el imputado al ser recluido de forma preventiva ya no significa un obstáculo a la investigación ni al cauce normal que debería tener el proceso penal.

Estos mismos puntos que eran a considerar para la procedibilidad de la prisión preventiva en México estuvieron presentes en los demás cuerpos normativos latinos después de la transición del sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio.

En el caso de la República de El Salvador, una vez que se da su reforma penal en el año de 1996 su Código Procesal Penal establecía en su artículo 293:

Artículo 293: Procederá la detención provisional cuando: Cuando el imputado no comparezca sin motivo legítimo a la primera citación o cada vez que el tribunal lo estime necesario. Cuando se considere que el imputado pueda obstaculizar un acto concreto de investigación (Código Procesal Penal de El Salvador, 1996)

Si bien el cuerpo jurídico de El Salvador no establece explícitamente como tal el riesgo de fuga, lo deja implícito al interpretar que si el imputado no atiende citación alguna realizada por el tribunal competente se entenderá como riesgo de fuga pues el acusado al hacer caso omiso a una citación dentro del proceso penal deja clara su intención al no querer ser parte del proceso y a no colaborar, al evidenciar su intención de sustraerse de la acción penal el legislador de El Salvador lo considera como riesgo de fuga.

El segundo punto relacionado a la obstaculización de la investigación penal por

parte del acusado el legislador de El Salvador lo deja muy claro, en el segundo del artículo 293 da a entender de forma literal que cuando el imputado sujeto a un proceso penal al gozar de su libertad implique un obstáculo a la investigación dentro del proceso implicaría un punto de procedibilidad de la prisión preventiva.

En el caso de Bolivia en su reforma a su Código Procesal Penal del año 2000 en su artículo 233 exponía lo siguiente:

Artículo 233: Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o del querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

... 2) La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad (Código Procesal Penal de Bolivia, 2000)

Para el legislador de Bolivia fue adecuado poner estos dos puntos que hemos abordado en un solo considerando de procedibilidad, utilizando otras palabras el segundo punto del artículo 233 del Código Procesal Penal de Bolivia consideraba el riesgo de fuga cuando el acusado no convenza al juez de que se someterá al proceso penal y en cuanto a la no obstaculización de investigación se cubre en la última línea de acuerdo a la obstaculización de la verdad.

Como ultimo cuerpo normativo a citar en cuestión a estos dos puntos que justifican la necesidad de cautela para los en ese momento nuevos sistemas penales acusatorios está el Código Procesal Penal de Costa Rica de 1996 que su código 239 establecía originalmente.

Artículo 239: El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento; obstaculizará la averiguación de la verdad o

continuara con la actividad delictiva (Código Procesal Penal de Costa Rica, 1996)

Como podemos observar el Código procesal Penal de Costa Rica tiene en su artículo 239 un contenido bastante parecido al artículo 233 del Código Procesal Penal de Bolivia, el que explícitamente se diga que hay presunción de que el imputado no se someterá al proceso penal hace referencia al riesgo de fuga y la última línea acerca de la averiguación de la verdad sucede exactamente lo mismo que, en el Código Procesal Penal de Bolivia, hacen referencia a la obstaculización de la investigación dentro del proceso penal.

Aunado a estos dos puntos que justifican la necesidad de cautela (el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación) y que se encontraban en todos los sistemas penales acusatorios latinoamericanos, existían otras causas de procedibilidad de la medida cautelar de la prisión preventiva como se puede observar en la tabla siguiente.

País	Otras Causales de Justificación
Chile	Peligro para la seguridad de la sociedad o del ofendido (Art. N° 140).
Colombia	Peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima (Arts. N° 310 y N° 311).
Costa Rica	Continuará la actividad delictiva (Art. N° 239 b).
El Salvador	Circunstancias del hecho, alarma social que su comisión haya producido o frecuencia con la que se cometan hechos análogos, o si el imputado se hallare gozando de otra medida cautelar. Asimismo, cuando por el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otros anteriores, el juez tenga grave sospecha de que continuará cometiendo hechos punibles (Art. 292 N° 2).
Honduras	Riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva de la que se sospecha pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación, facilitar la fuga de otros imputados (Art. 178 N° 3) y peligro de represalia contra el acusador o denunciante (Art. 178 N° 4).
Panamá	Peligro para la comunidad por pertenecer a organizaciones criminales, por la naturaleza y número de delitos imputados o por contar con sentencias condenatorias vigentes (Art. 227 N° 3) y cuando existan razones fundadas para inferir peligro de atentar contra la víctima o sus familiares (Art. 227 N° 4). (CPP de 2008).
Nicaragua	Peligro de que cometa nuevos delitos o de que continuará con actividad delictiva (Art. 173 N° 3 c).

(Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2013)

En la tabla se muestran siete países latinoamericanos donde además de los dos puntos que ya tocamos tienen como causas de procedibilidad para la prisión preventiva los ahí evidenciados.

En México las otras causas de procedibilidad de la prisión preventiva es que la libertad del acusado implique un riesgo para la sociedad, víctima o testigos, además de que considera de igual manera como causa de procedibilidad la reincidencia en la comisión de delitos dolosos.

Como podemos observar pese a que estas reformas constituyeron en gran medida un avance para que la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva no fuese aplicada de gran manera, la realidad es que las causas de procedibilidad en todos los cuerpos normativos latinos seguían siendo bastante deficientes, pues todo se basaba en sospechas y riesgos mas no en acciones propias comprobables, esto implicaba e implica actualmente una violación a la presunción de inocencia pues al actuar de tal manera se utiliza una presunción de culpabilidad.

3.1.4. LA DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS NUEVOS SISTEMAS PENALES ACUSATORIOS LATINOAMERICANOS

Después de las múltiples críticas relacionadas a la prisión preventiva durante el sistema penal inquisitivo latino enfocadas a su enorme duración ya que no tenía como tal un límite aparte de la pena en si del delito en caso de ser declarado culpable, en el nuevo sistema acusatorio los países latinos buscaron no volver a cometer este error en sus legislaciones poniendo en su mayoría un límite de tiempo que no podría ser rebasado salvo que sea por motivos de la defensa del acusado.

La prisión preventiva debería de tener limitantes acorde al tiempo de duración por múltiples razones relacionadas con los derechos humanos y el debido proceso, con estos límites temporales las legislaciones del nuevo sistema acusatorio buscaban evitar abusos y que la medida cautelar de la prisión preventiva ya no fuera vista

como una forma de pena anticipada y así no violar el principio de presunción de inocencia pues recordemos que esta medida cautelar es aplicada sin que se determine la culpabilidad del acusado.

Una problemática que acontecía en los sistemas penales inquisitivos latinos es que al no tener una limitante de tiempo para la prisión preventiva que no fuera la duración de la propia pena en caso de ser declarado culpable es que esta medida cautelar se podría mantener por años sin que se le brindara al acusado una resolución judicial incluso los plazos de tiempo que manejaba el proceso penal inquisitivo ya no sea para la emisión de una sentencia en si sino que el proceso penal en general podría prolongarse por años y años, en el nuevo sistema acusatorio aparte de los límites de tiempo a la prisión preventiva también el proceso penal se concentraba en menos actos y menor tiempo.

Con el hecho de establecer un límite de tiempo para la prisión preventiva se buscaba garantizar que la medida cautelar fuese utilizada de manera justa, fuese proporcional con las características de determinado proceso penal y que no fuese una figura que violase los derechos del acusado al buscar que ya no fuese considerada una pena anticipada.

En la siguiente tabla se puede observar los limites en temporales que decidieron poner los países latinoamericanos a la medida cautelar de la prisión preventiva en sus nuevos sistemas penales acusatorios:

País y referencia normativa	Carácter excepcional de la prisión preventiva	Límite de tiempo específico para la prisión preventiva
Provincia de Buenos Aires, Argentina, Ley N° 11922.	Sí.	No.
Bolivia, Ley N° 1970.	Sí.	Cuando su duración exceda 18 meses sin que se haya dictado sentencia o de 24 meses sin que hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada.
Chile, Ley N° 19.696.	Sí.	No.
Colombia, Ley N° 906.	Sí.	Si en 60 días a partir de la imputación no se hubiere presentado la acusación o solicitado la preclusión.

Costa Rica, Ley N° 7594.	Sí.	Cuando su duración exceda 12 meses.
Ecuador, Ley N° 000. RO/ Sup 360.	Sí.	La prisión preventiva no podrá exceder 6 meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni 1 año en delitos sancionados con reclusión.
El Salvador, Decreto Legislativo N° 904 de 1996.	Sí.	En ningún caso puede sobrepasar la pena máxima prevista en la ley, ni exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves o 24 meses para los graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal.
Guatemala, Decreto N° 51-92.	Sí.	Cuando su duración exceda 1 año, pero si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar 3 meses más.
Honduras, Decreto N° 9-99-E.	Sí.	La regla general de duración es de 1 año, a menos que el delito tenga asignada pena superior a 6 años, en cuyo caso son 2 años, ampliables por resolución de la Corte Suprema por 6 meses más. Límite definitivo la mitad de la pena mínima asignada al delito.
Nicaragua, Ley N° 406.	Sí.	La prisión preventiva nunca podrá exceder el tiempo de la pena impuesta por la sentencia impugnada y, de ser el caso, bajo responsabilidad, el tribunal que conoce del recurso, de oficio o a petición de parte deberá dictar auto ordenando la libertad inmediata del detenido.
Paraguay, Ley N° 1286 de 1998.	Sí.	No puede exceder la pena asignada al delito.
Perú, Decreto Supremo N° 005-2003-JUS.	Sí.	La prisión preventiva no durará más de 9 meses. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses.
República Dominicana, Ley N°. 76-02.	Sí.	Un máximo de 12 meses y, en caso de recurrirse la sentencia condenatoria, hasta 6 meses más.
Venezuela, Código Orgánico Procesal Penal de 1998.	Sí.	En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de 2 años.

(Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2013)

En México hay que recordar que desde la reforma del 2008 que implicó la entrada del nuevo sistema penal acusatorio el límite que se le puso a la prisión preventiva fue de un máximo de 2 años salvo que la defensa del acusado requiera que se conserve esta medida cautelar durante más tiempo.

En la tabla podemos observar que en su mayoría tienden a poner el límite de la medida cautelar de prisión preventiva entre los 6 meses a los 24 meses aunque existen legislaciones que se han quedado rezagadas y sus límites a la medida

cautelar son bastante extensos el caso de la provincia de Buenos Aires Argentina y Chile son dos sistemas penales acusatorios que no contemplan un límite de duración para la prisión preventiva, las reformas judiciales en estos dos países contemplaron la excepcionalidad de aplicación de esta medida cautelar, logrando que ya no fuese la regla general poniendo específicos puntos de procedibilidad a la figura de prisión preventiva sin embargo no contemplaron ponerle un límite a su duración.

Pese a estas reformas penales algunos países conservaron la duración de la prisión preventiva que se tenía en sus sistemas penales inquisitivos como fueron los casos de Paraguay y Nicaragua que en ambos cuerpos legislativos concebían un límite a la prisión preventiva equivalente a la duración de la pena del delito por el que estén sujetos a un determinado proceso penal, todo esto sin que exista una sentencia que determine la culpabilidad del acusado, sin duda alguna pese a que al igual que la Provincia de Buenos Aires Argentina y Chile lograron limitar el uso de la prisión preventiva haciendo la de uso excepcional no menos cierto es que los cuatro sistemas penales acusatorios seguían sin poner un límite adecuado a la duración de la prisión preventiva prolongando la violación a los derechos humanos de los acusados. Si bien los cuatro ejemplos anteriores son casos donde el sistema penal acusatorio tuvo deficiencias bastante graves en la cuestión de la duración sobre la medida cautelar de la prisión preventiva no menos cierto es que el límite de la duración en el resto de los países es considerado bastante extenso, límite de hasta 24 meses en algunos países, dos años de prisión preventiva es un tiempo bastante extenso en especial si se llega a dar el caso de ser declarado inocente, que sucedía en más del 70% de los casos, en el otro 30% de los casos la prisión preventiva funciona como una pena anticipada sin embargo la pena anticipada cuando aún no se te declara la culpabilidad dentro de un proceso penal es una clara violación al derecho humano de presunción de inocencia.

En ese sentido la duración de la prisión preventiva sigue siendo pese a las reformas penales una práctica violatoria a Derechos humanos, en el caso menos lesivo sucede cuando el acusado resulta ser sentenciado como culpable y en esos casos la prisión preventiva serviría como una pena anticipada aun así no hay que olvidar

que la pena anticipada constituye una clara violación al derecho humano a la presunción de inocencia, por definición la pena anticipada, es la imposición de una pena sin antes existir una sentencia condenatoria, el principio de inocencia debería tener mayor alcance y ser respetado.

En la otra cara de la moneda al ser declarado inocente y durante el proceso ser víctima de la medida cautelar de la prisión preventiva las violaciones a derechos humanos se agravan, el derecho a la libertad principalmente, ser recluso de forma preventiva es la medida cautelar más lesiva que existe en los sistemas penales acusatorios, al tener un límite de dos años en algunos países la vuelve bastante transgredir al acusado, si bien no todos los procesos penales duran más de dos años, el hecho de ser recluso durante todo el proceso penal para al final ser declarado inocente genera un impacto negativo a los derechos humanos del acusado.

3.1.5. OTRAS MEDIDAS CAUTELARES APARTE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO LATINOAMERICANO

Con el nuevo sistema penal acusatorio latino no solo se logró regular la prisión preventiva sino que también se logró incluir un catálogo de medidas cautelares más extenso y que buscarían lograr los objetivos del proceso penal, evitando lo más posible el uso de la prisión preventiva, cumpliendo con los objetivos generales de las medidas cautelares, evitar que el imputado se sustraiga de la acción penal, evitar obstáculos a la investigación dentro del proceso penal y proteger la integridad de las víctimas y testigos así como la seguridad de la sociedad en general.

En la siguiente tabla se muestran las medidas cautelares que se incluyeron en los sistemas penales acusatorios con el fin de dejar a la prisión preventiva como última opción y ser utilizada en casos excepcionales.

País	Arresto domiciliario	Presentación Periódica ante autoridad	Arraigamiento nacional o local	Prohibición de concurrir a determinados lugares	Fianza	Otras
Argentina, Provincia de Buenos Aires	X	X	X	X	X	
Bolivia	X	X	X	X	X	Prohibición de comunicación con la víctima.
Chile	X	X	X	X	X	-Vigilancia por autoridad. -Prohibición de comunicación con la víctima. -Prohibición de acercarse al ofendido.
Colombia	X	X	X	X	X	-Vigilancia electrónica. -Obligación de observar buena conducta familiar. -Prohibición de comunicación con la víctima.
Costa Rica	X	X	X	X	X	-Abandono de domicilio por VIF. -Suspensión de ejercicio de cargo por delito de funcionario. -Vigilancia por autoridad. -Prohibición de comunicación con la víctima. -Prohibición de acercarse al ofendido.
Ecuador	X	X	X	X	X	-Prohibición de acercarse a determinadas personas. -Vigilancia por autoridad -Suspensión de funciones que desempeña cuando hay algún influjo sobre víctimas o testigos.
El Salvador	X	X	X	X	X	-Prohibición de comunicación con la víctima. -Vigilancia por autoridad.
Guatemala	X	X	X	X	X	Prohibición de comunicación con determinadas personas.

Honduras	X	X	X	X	X	-Prohibición de comunicación con la víctima. -Vigilancia por autoridad. -Suspensión de ejercicio de cargo por delito de funcionario.
Nicaragua	X	X	X	X	X	- Someterse al cuidado de otra persona. - Prohibición de comunicarse con la víctima. - Abandono del domicilio en caso de violencia intrafamiliar. - Prohibición de despedir o de cualquier otra represalia en contra del denunciante de un delito de acoso sexual. - Suspensión del ejercicio del cargo cuando el delito haya significado abuso de éste.
Panamá	X	X	X	X	X	-Abandono inmediato del domicilio en caso de agresiones y de que la víctima conviva con el agresor. -Suspensión de ejercicio de cargo público o privado. -Obligación de no realizar actividad. -Colocación de localizadores electrónicos.
Paraguay	X	X	X	X	X	-Prohibición de comunicarse con determinadas personas. -Vigilancia por autoridad.

(Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2013)

En México las medidas cautelares adoptadas fueron las siguientes de acuerdo al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 155: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin

autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. (Código Nacional de Procedimientos Penales, 2025).

Con el cambio de sistema penal inquisitivo a acusatorio se le dio su importancia al hecho de que existan más medidas cautelares aparte de la prisión preventiva porque estas alternativas permitirían garantizar el equilibrio entre los derechos del acusado y la necesidad de asegurar la correcta administración de justicia.

Con un catálogo más extenso de medidas cautelares aplicables se puede lograr de mejor manera la protección del principio de presunción de inocencia, pues hay que recordar que la medida cautelar de prisión preventiva implica la privación provisional de la libertad de una persona o sea antes de ser declarada culpable por una sentencia emitida por un juez competente, situación que claramente se contradice con el principio de presunción de inocencia.

Al contar con medidas cautelares diversas a la prisión preventiva y al usarlas, se puede garantizar que el acusado no sea tratado como culpable antes de una condena firme, respetando así este derecho fundamental y dando cumplimiento al debido proceso del proceso penal, pues si bien el resto de las medidas cautelares implican limitaciones a las acciones o libertades del imputado, son mucho menos

lesivas que la prisión preventiva.

Otra consecuencia de contar con un catálogo de medidas cautelares extenso fue contrarrestar el abuso de la prisión preventiva, como es de conocimiento común en muchos sistemas penales, incluido el sistema penal mexicano, la medida cautelar de la prisión preventiva ha sido utilizada de manera excesiva, tan es así que su aplicación se da incluso en casos donde no es estrictamente necesaria. Las medidas cautelares diversas permiten a la autoridad imponer una solución que sería más proporcional al riesgo que representa el acusado correspondiente y de esta forma se reservaría la prisión preventiva solo para ser aplicada en situaciones verdaderamente excepcionales frenando su abuso con una diversificación de medidas cautelares el sistema acusatorio buscó también dar solución a una crítica recurrente, la violación a los derechos humanos, la medida cautelar de la prisión preventiva trae consigo efectos devastadores en la vida de un determinado imputado sujeto a un proceso penal, afectaciones en el ámbito familiar, laboral y social que sin duda son muchas veces irreparables por otro lado con el uso de las demás medidas cautelares estos ámbitos de la vida personal de un imputado no se ven afectados en un nivel tan grande pues le permiten a determinado imputado continuar su proceso legal fuera de prisión, siempre y cuando se le den cumplimiento a los objetivos de una medida cautelar, que son que el imputado no se sustraiga del proceso penal, que se garantice la seguridad de la víctima y testigos y el proceso penal se desarrolle de forma óptima.

Descongestionar los centros de reinserción social o los reclusorios era otra de las consecuencias que se podía observar con el implemento del uso de otras medidas cautelares, como ya hemos analizado el uso excesivo de la prisión preventiva genera fenómenos como el hacinamiento, lo cual provoca que las instalaciones de reclusión sean precarias, con condiciones muchas veces inhumanas y que generan un desgaste físico y psicológico a todos los reclusos en este espacio, ya sea por la medida cautelar de la prisión preventiva o por cumplir una sentencia condenatoria, si se le da mayor prioridad al resto de las medidas cautelares y se evita el uso de la prisión preventiva con esto se lograra reducir la sobrepoblación dentro de las

prisiones y esto causara una mejora en las condiciones de aquellos que tengan que verse en la necesidad de ser reclusos en estos espacios.

El catálogo de medidas cautelares es extenso con el fin de proporcionar a cada caso en específico una medida cautelar idónea que se adapte a cada situación en particular, esto tiene que ver con el principio de proporcionalidad de la medida cautelar, una medida cautelar debe de limitar o restringir al imputado de forma proporcional a su conducta y características, no todos los acusados representan el mismo nivel de riesgo o de amenaza y para ello la aplicación de distintas medidas cautelares a la prisión preventiva deben ser aplicadas, cada cual ajustándose a cada caso particular buscando en todo momento que se cumplan los objetivos de una medida cautelar pero también la no transgresión de los derechos de un imputado. Otra consecuencia de utilizar medidas cautelares diversas a la prisión preventiva es la reintegración del imputado a la sociedad de una mejor manera, si mantenemos al acusado fuera de prisión durante el desenvolvimiento de un proceso penal, se permitiría que el imputado siga siendo un miembro funcional en la sociedad pues seguiría desenvolviéndose en su empleo o educación, daría cumplimiento a sus responsabilidades familiares y en caso de ser declarado inocente en el proceso penal su imagen frente al ojo de la sociedad estaría libre de prejuicios por nunca haber sido recluso.

En conclusión, contar con una variedad de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva es crucial para promover un sistema de justicia penal más justo, equilibrado y respetuoso de los derechos humanos, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad y el buen desarrollo del proceso judicial.

4. MARCO NORMATIVO

La prisión preventiva es una medida cautelar que se encuentra regulada por la legislación mexicana, entre sus objetivos se encuentran que el imputado se encuentre presente en juicio o sea que no se sustraiga de la acción penal, evitar los comportamientos que de cierta forma dificulten la investigación judicial y

salvaguardar la seguridad de la víctima así como la de la sociedad, la figura de la prisión preventiva se encuentra regulada en principio por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al igual que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo la prisión preventiva es una figura jurídica contemplada internacionalmente, los principales acuerdos internacionales que la contemplan y de los cuales México es parte son: La Declaración Universal De Los Derechos Humanos, La Declaración Americana De Derechos Humanos, El Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Y Por Último La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

La práctica de esta medida cautelar a consideración propia violenta los derechos humanos de todo aquel imputado al que se le aplique esta medida, derechos humanos que se encuentran reconocidos en los mismos cuerpos jurídicos mencionados con anterioridad y es donde a consideración propia surgen conflictos que evidencian la falta de una reforma que regule de mejor manera la aplicación de esta medida cautelar o en su defecto la abolición de la propia.

Los cuerpos normativos que son encargados de salvaguardan tanto los derechos de un determinado imputado sujeto a un proceso penal y aquellos que regulan la práctica de la medida cautelar de la prisión preventiva deben tener un equilibrio para que de esa forma se logre que el desenvolvimiento del proceso penal logre sus propios objetivos a la par que proteja los derechos del acusado, el orden público y los derechos de la víctima.

En el siguiente capítulo se recopila y examina los principales preceptos legales que giran en torno al uso de la prisión preventiva y aquellos preceptos jurídicos que defienden las garantías individuales de una determinada persona que no ha sido condenada pero que debido a la aplicación de esta medida cautelar se encuentra reclusa de forma preventiva y por tanto privada de su libertad personal.

4.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL

Como marco normativo nacional nos centraremos en analizar los cuerpos jurídicos que regulan la figura de la prisión preventiva en México, como lo mencionamos en la introducción del capítulo estos cuerpos normativos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional De Procedimientos Penales.

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Constitución, que es nuestro máximo orden jurídico al contar con el primer rango de jerarquía en nuestra nación regula la medida cautelar de la prisión preventiva principalmente en los siguientes tres artículos:

4.1.1.1. ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL

El primer artículo de la constitución que versa sobre la prisión preventiva es el número 18 en su primer párrafo en el cual a propia letra menciona: “Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025).”

Pese a ser solo mencionada la prisión preventiva en el primer párrafo nos menciona algo de gran importancia, uno de los factores de procedibilidad que tiene dicha medida cautelar dentro del territorio nacional, cuando la pena del delito por el cual se esté realizando la investigación penal proceda la pena privativa de la libertad o sea sé de una reclusión en caso de ser dictada una sentencia condenatoria solo en ese supuesto se podrá imponer la medida cautelar de la prisión preventiva.

Resulta importante mencionar que el artículo menciona que aquel lugar de reclusión para aquellos imputados a los que se les haya impuesto tal medida cautelar deberá ser diferente y estará completamente separado del lugar donde extingan su pena

aquellos ya sentenciados, situación que no sucede en la mayoría de los Centros de Reinserción Social, aquellos reclusos por sentencia condenatoria y aquellos reclusos por imposición de una medida cautelar ya sea prisión preventiva oficiosa o justificada conviven en el mismo espacio y al mismo tiempo, esto debido a la enorme sobrepoblación carcelaria que existe en el país imposibilitando el cumplimiento de este factor tan importante, de acuerdo a los datos que proporciona el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria “124 Centros Penitenciarios en México sufren sobre población” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2024). La sobre población carcelaria trae consecuencias graves entre ellas la falta de disponibilidad de espacios para personas reclusas por la medida cautelar de la prisión preventiva, lo cual genera una convivencia obligatoria en un espacio que sufre los estragos del hacinamiento y con compañeros que se encuentran reclusos por una sentencia, convirtiendo un centro penitenciario en una Universidad del Crimen.

Ahora bien, si nos volvemos a centrar en la primera parte del párrafo en la que se nos hace mención que la prisión preventiva procederá cuando la pena del delito que se investiga sea de privación de la libertad, como observamos en el capítulo anterior muchos antecedentes de la actual figura de prisión preventiva permitían su aplicación cuando se tratara de delitos que tuvieran una pena media aritmética de 5 o 4 años, en la actualidad solo basta con que el delito investigado tenga una pena privativa de la libertad.

Actualmente el Código Penal Federal y el Código Penal para el Estado de Hidalgo contemplan penas de prisión bastante bajas, en el ámbito federal “La pena mínima de prisión será de 3 días” (Código Penal Federal, 2024) y en el ámbito local “La pena mínima de prisión será de 3 meses.” (Código Penal para el Estado de Hidalgo, 2024) lo cual en primera instancia permitirían a la gran mayoría de delitos la oportunidad de aplicación de prisión preventiva, aunque sea en su modalidad justificada.

El hecho de que el primer filtro que nos menciona la constitución para la procedibilidad de la prisión preventiva sea tan poco restrictivo permite el uso

excesivo de esta medida que a la par contribuye a sobre población carcelaria.

4.1.1.2. ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL

Inmediatamente después de la mención de la prisión preventiva en el artículo número 18, nuestra Constitución en su artículo 19 nos menciona uno de los artículos más importantes de la medida cautelar que hoy estudiamos.

Artículo 19: ...El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso... (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025)

El artículo 19 de la constitución, nos habla acerca de las dos modalidades de la prisión preventiva, en la primera parte del primer párrafo nos encontramos con la regulación de la prisión preventiva de forma justificada, como bien sabemos cuándo se encuentra en este carácter tal medida cautelar, el agente del ministerio público tendrá que convencer por al juez de control durante la audiencia inicial por qué la medida cautelar de prisión preventiva deberá ejercerse en un determinado caso particular, el agente del ministerio público al hacer su justificación de manera oral tendrá que tomar en cuenta algunos factores para realizarla, los cuales son:

Garantizar la comparecencia del imputado en juicio, en otras palabras, asegurar que el imputado no se sustraiga de la acción penal permitiendo así que el proceso penal siga su cause común sin ningún tipo de complicaciones, en este sentido en un primer momento resulta severamente excesivo recluir a alguien solo para asegurar su comparecencia, existen múltiples medidas cautelares que podrían garantizar que el imputado comparezca en juicio, la función del agente del ministerio público ser

evidenciar que ninguna medida cautelar podría asegurar la comparecencia del imputado, para esta parte ya podemos denotar que el debate en si sobre la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva es en gran parte pre juiciosa, ¿Como podrías evidenciar fuera de toda duda razonable que ninguna medida cautelar es suficiente para asegurar que el imputado comparezca? Este debate en base a argumentos prejuiciosos pone en seria desventaja a aquel que es investigado por la posible comisión de un delito.

El siguiente factor es asegurar la protección de la víctima y testigos en este sentido de forma que en caso de no recluir al imputado no se pueda asegurar su seguridad y aquí el servidor quisiera tomar un momento para evidenciar que este factor en específico va en contra de los cánones y paradigmas propios de la esencia del Derecho, el derecho se supone que regula las conductas del hombre cuando estas se manifiestan en el exterior, cuando sucede un cambio en el universo, pero según este factor se tiene que recluir al imputado (que aún no se le demuestra su culpabilidad en el delito investigado) para que este no haga algo que ponga en peligro la seguridad de las partes del proceso, este factor pide recluir a alguien cuando aún no sucede cierta situación que ponga en peligro a la víctima o al testigo, otro factor que claramente se ve viciado por el debate prejuicioso que engloba la imposición de la prisión preventiva en su modalidad justificada.

El último factor a considerar es que determinado imputado con anterioridad haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso, esto contraviene el principio rector del derecho NON BIS IN IDEM que significa que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito, si bien es un factor a considerar y no un proceso penal particular como tal, no menos cierto es que la función de un juez es juzgar y al juzgar emitir una resolución, que en este caso es imponer una medida cautelar lesiva como lo es la prisión preventiva o no imponerla, si un ciudadano comete un delito, es juzgado, condenado por una sentencia condenatoria y después da cumplimiento a la sentencia no tendría que ser motivo a considerar en un nuevo proceso penal, es evidente el gran prejuicio que existe en este debate y no importa si ya el imputado pago su deuda con la sociedad no se le ve de la misma forma que otro imputado

que no haya sido sentenciado por un delito doloso, siendo esto otra clara violación a los principios del derecho ahora al de igualdad ante la ley.

Siguiendo con el análisis del artículo 19, en la segunda mitad del segundo párrafo justo después de regular la prisión preventiva en su carácter justificada nos muestra la medida cautelar, pero ahora de forma oficiosa:

Artículo 19: ...El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025)

El legislador en este artículo nos engloba todos los delitos que son considerados graves, esta lista de delitos ha sufrido grandes cambios con el paso del tiempo hasta el punto en el que hoy en día se habla de una gran cantidad de delitos considerados como graves, la intención del servidor no es tratar de hacer ver o dar la impresión de que estos delitos contenidos en este artículo son menos graves de lo que realmente son, es claro que son conductas delictivas que por sus características y modalidades tienen un gran impacto a la seguridad de la sociedad y con muy justa razón son considerados delitos graves, sin embargo el verdadero problema que ocupa esta tesis es el uso de la prisión preventiva.

En la primera mitad del artículo se regulaba la medida cautelar en su forma justificada que pese a ser un debate de gran prejuicios y clara desventaja para el imputado no menos cierto es que por lo menos para aplicar esta medida cautelar debe darse un debate, se le está otorgando al imputado la oportunidad para que por medio de su defensa este haga lo posible por lograr combatir los argumentos del agente del Ministerio Público, sin embargo en esta segunda mitad del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se nos habla de un carácter de oficialidad para la imposición de esta medida cautelar, el término de “oficialidad” se interpreta que se dará aplicación a la medida cautelar de forma automática, es decir que para esta modalidad no existe un debate o más bien no existiría posibilidad alguna de que el imputado gane este debate y evite la aplicación de tal medida cautelar, con el simple hecho de ser un imputado y estar sujeto a un proceso penal donde el delito investigado sea uno de los mencionados en el precepto legal ya referido, la prisión preventiva procederá de forma automática sin tomar en consideración el resto de las medidas cautelares contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El día primero de abril del año 2025 se añadió una última parte al segundo párrafo del artículo 19 el cual versa de la siguiente manera:

Artículo 19: ... Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025)

Esta última anexión a la parte final del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, muestra el cómo a pesar de que la prisión preventiva es una medida cautelar criticada por su lesividad, no existe una intención del legislador de abolir o modificar dicha medida cautelar, por el contrario, se recalca que este artículo en particular que versa sobre la oficialidad de esta medida no debe prestarse a

interpretaciones análogas sino más bien atenderse a la literalidad de lo establecido, dejando fuera toda forma de poder evitar la oficialidad de esta medida cautelar cuando un imputado se encuentra bajo un proceso penal por la comisión de alguno de los delitos contenidos en el ya muy extenso catálogo de delitos considerados graves.

4.1.1.3. ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL

Siguiendo adelante con los artículos de la constitución política nos encontramos con el artículo 20 que versa acerca de los principios que rige el procedimiento penal, los derechos de la víctima y de los derechos del imputado, que es lo que nos ocupa en este momento, específicamente aquel derecho que más se ve violentado por la aplicación de la prisión preventiva: “Artículo 20: De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025)

El derecho a la presunción de inocencia, consiste en que todos debemos ser tratados como inocentes hasta que no exista una sentencia firme emitida por un juez competente que demuestre lo contrario, lastimosamente con la exhaustiva práctica de la prisión preventiva este derecho ya no se encuentra garantizado o protegido en su totalidad, si todos tenemos el derecho a ser tratados como inocentes, ¿Por qué tendríamos que ser reclusos y privados de nuestra libertad mientras esperamos una sentencia?, ¿Porque nuestra garantía individual a la libertad no es respetada? Ser parte de un proceso penal es una situación difícil y complicada, pero pasar el proceso recluso y privado de a libertad lo vuelve aún más complejo, existe claramente una contradicción entre la práctica de la prisión preventiva y el derecho humano a la presunción de inocencia.

4.1.2. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Código Nacional de Procedimientos Penales es el ordenamiento jurídico que tiene como fin el poder establecer las regulaciones que deberá tener un proceso penal a lo largo de sus etapas, es útil mencionarlo porque dentro de las etapas del proceso penal se encuentra la audiencia inicial y la audiencia inicial es el momento procesal oportuno para poder dictaminar que medidas cautelares son las apropiados para imponerle a un determinado imputado sujeto a un proceso penal ya sea del fuero estatal o del fuero federal y dentro del catálogo de medidas cautelares se encuentra la prisión preventiva.

El catálogo de medidas cautelares que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra en el artículo 155 el cual versa de la siguiente manera:

Artículo 155: ...

- I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez

disponga, o XIV. La prisión preventiva. (Código Penal Federal, 2024)

Las medidas cautelares en general tienen las mismas funciones, objetivos o finalidades y estas son asegurar la comparecencia del imputado dentro del proceso penal (o sea que el investigado no se sustraiga del proceso penal), la protección de la víctima, los testigos y la sociedad en general (que se podrían ver vulneradas por la libertad de determinado imputado) y evitar obstáculos durante el desarrollo del proceso penal (obstáculos que posiblemente pudiesen existir de no recluir provisionalmente al imputado).

Las medidas cautelares en el sistema penal mexicano se diferencian unas con otras debido a su nivel de lesividad, de hecho, el catálogo o listado de medidas cautelares que propone el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales está escrito de forma que las primeras son menos lesivas que las últimas contenidas en el listado, siendo la más lesiva aquella que es la causa de esta tesis, la prisión preventiva.

La medida cautelar de Prisión Preventiva deberá proceder cuando a consideración del juez (Después de la propuesta del agente del Ministerio Público y el debate entre la fiscalía y la defensa del imputado) ninguna otra medida cautelar pueda ser suficiente para cumplir con los propósitos de las medidas cautelares.

Acerca de la prisión preventiva también se nos menciona que no tendrá que durar más de 2 años salvo que la razón por la que se rebase esta temporalidad sea por motivos de la defensa del propio imputado y también se nos menciona que el tiempo que un imputado pase en prisión preventiva se le computara en forma de pena en caso de ser condenado por una sentencia condenatoria que tenga como pena la reclusión en un centro de reinserción social, que como ya vimos anteriormente la gran mayoría de delitos según los códigos penales tanto locales como en el federal, si alcanzan una pena de cárcel.

4.2. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

El marco normativo internacional de la prisión preventiva se basa en principios fundamentales de derechos humanos y en acuerdos multilaterales que buscan garantizar que esta medida cautelar sea utilizada de manera excepcional y conforme a criterios claros y objetivos.

Diversos instrumentos internacionales de los que México es parte establecen prerrogativas esenciales para proteger el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia.

Estas normativas internacionales sugieren que la medida cautelar de prisión preventiva debería ser aplicada de manera proporcional únicamente en casos donde sea estrictamente necesarios y donde verdaderamente exista una justificación fundada en el riesgo de fuga, de obstaculización del proceso penal o de riesgo de la víctima y testigos, además que de ninguna otra medida cautelar se puedan evitar estos peligros.

Estos cuerpos legales promueven que la medida cautelar de prisión preventiva sea revisada periódicamente y se utilicen medidas menos restrictivas siempre que sea posible. A partir de estas disposiciones, los Estados que forman parte de dichos tratados internacionales se encuentran obligados a realizar sus legislaciones internas con apego a los estándares internacionales, garantizando así el respeto de los derechos fundamentales de los individuos sometidos a un proceso penal.

4.2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Hablar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es posiblemente hablar de uno de los documentos en materia internacional más importantes de la historia, con fecha de publicación el 10 de diciembre de 1948 en lo relativo a nuestro tema en su artículo 11 menciona:

Artículo 11: 3. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley

y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)

El derecho humano a la presunción de inocencia, ser tratado como inocente hasta que no se nos demuestre la culpabilidad en la comisión de un acto considerado como delito por determinado cuerpo jurídico de observancia en un espacio y tiempo específico. La prisión preventiva en ese sentido vulnera tal derecho humano al recluir a determinado imputado de forma preventiva.

4.2.2. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Esta declaración fue aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, en 1948. En lo relativo a este instrumento internacional, existe divergencia de opiniones respecto a su carácter obligatorio, debido a su naturaleza declarativa, por otro lado, en la práctica, resulta difícil negar su validez jurídica, ya que constituye parte de los estándares universalmente aceptados en la materia, en lo relativo al tema que hoy nos compete el artículo 26 a letra nos menciona:

ARTÍCULO XXVI Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas. (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2017)

Este artículo nos establece un principio esencial del derecho penal y un derecho humano de vital importancia, la presunción de inocencia, por medio del cual se procura que cualquier persona acusada de un delito debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario, ser recluso de forma preventiva por una medida cautelar merma el alcance de este derecho humano a un determinado

imputado.

Si seguimos con la lectura el artículo de igual forma, garantiza el derecho a un juicio justo, donde el acusado sea escuchado de manera equitativa y pública, y sea juzgado por un tribunal adecuado y que este actúe conforme a leyes vigentes al momento de la acusación.

De igual manera también se busca proteger al acusado contra la imposición de sanciones desproporcionadas, humillantes o inusuales, la reclusión preventiva como medida cautelar puede ser descrita como desproporcional pues pese a que existe un debate previo en cuanto a la medida cautelar en su forma justificada anteriormente ya describimos como este debate puede llegar a ser prejuicioso y tendiente a poner en desventaja a la parte acusada, podríamos considerar que de igual forma es humillante pues al ser recluido en un Centro de Reinserción Social se le está dando el mismo trato que se le daría a un ciudadano que ya ha sido encontrado culpable y ha quedado firme una sentencia en su contra, recibir el mismo trato y ser recluido en el mismo espacio y tiempo para una persona que aún no se comprueba su culpabilidad es un trato degradante y sin duda afecta el cómo es percibido por el ojo público de la sociedad, en lo relacionado a “pena inusual” lamentablemente nos encontramos que en la realidad la prisión preventiva ya sea en su carácter oficiosa o justificada es una medida cautelar que sufre un gran abuso, afectando aproximadamente a la tercera parte de la población carcelaria en México.

De alguna forma teórica el artículo de la declaración americana de los derechos del hombre garantiza el respeto a la dignidad humana durante el desarrollo de un determinado proceso judicial, sin embargo, podemos observar que en la práctica tal disposición no se le da cumplimiento al permitir que la medida cautelar de la prisión preventiva se encuentre en gran uso en nuestro territorio nacional.

4.2.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o por sus siglas el PIDCP es un tratado internacional del cual México es parte al ser adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 años en que se redactó y que entra en vigor en el año de 1976. Lo relevante de este pacto es que establece una serie de derechos fundamentales y que los Estados signatarios se encuentran comprometidos a respetar y proteger en sus respectivas legislaciones particulares y sistemas jurídicos.

Este tratado internacional también da nacimiento a mecanismos que tienen la finalidad de supervisar el cumplimiento de los derechos incluidos en este pacto, mecanismos como lo es el Comité de Derechos Humanos, que se encarga de recibir y analizar los informes de los Estados partes e incluso en algunos casos puede recibir quejas individuales cuando éstas versen sobre violaciones de los derechos contenidos dentro de este pacto. Es importante mencionar que el PIDCP, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y también la Declaración Universal de Derechos Humanos, son documentos que conforman lo que se conoce como la "Carta Internacional de Derechos Humanos".

En lo relativo a nuestro tema de estudio nos encontramos con artículos importantes, en primer lugar, el artículo noveno en su párrafo tercero a letra nos menciona:

Artículo 9:

3...La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966)

Este artículo es bastante importante pues nos establece que la medida cautelar de la prisión preventiva no debería ser empleada como una medida común o de forma automática en los procesos judiciales, situación que no es del todo cierta en la práctica del sistema penal mexicano.

Se nos establece que la privación de la libertad de forma precautoria antes del juicio debe aplicarse de forma excepcional, solo cuando sea realmente necesario pero para eso se debería implementar un verdadero análisis estudio de cada caso en particular donde quede completamente claro que ninguna de las medidas cautelares que existen dentro de los cuerpos normativos locales no son medidas suficientes para garantizar que el imputado tenga presencia en el proceso penal, se procure la seguridad de la sociedad en general y no se generen obstáculos al proceso penal, estudio, análisis y debate que hoy en día no se lleva acabo de tal manera.

En la actualidad un debate sobre la imposición de medidas cautelares en la forma práctica toma aproximadamente 10 minutos, tiempo insuficiente para de verdad hacer un análisis y una ponderación acerca sobre qué medidas cautelares se deben imponer por su idoneidad a cada determinado caso en particular.

Dentro del contenido del artículo se nos habla acerca de la libertad del acusado y es muy importante hacer hincapié en que hablamos de la libertad de un acusado sin embargo no estamos hablando de la libertad de un sentenciado, nos referimos a una persona que aún no se le comprueba una conducta culpable, el artículo nos menciona que la libertad provisional de un acusado podría llegar a estar condicionada a la implementación de ciertas garantías y aquí es donde hablamos de las medidas cautelares de cada cuerpo jurídico particular de cada Estado que aseguren su presencia en el juicio y su colaboración con las diligencias judiciales.

En este sentido como ya hemos estudiado estas medidas cautelares tienen que brindar las garantías de evitar el riesgo de fuga, la protección de las partes y la sociedad, evitar la obstaculización del proceso o que el acusado no cumpla con la sentencia en caso de ser condenado y esto es bastante relevante porque que un pacto internacional regule acerca de las medidas cautelares de cada Estado y darle privilegio a estas medidas antes que a la prisión preventiva promueve la utilización de alternativas a la prisión preventiva, buscando equilibrar el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al ser tratado de forma equitativa cumpliendo con las necesidades que tiene cada proceso penal en particular.

El artículo que igual toca nuestra temática consagrandó así el derecho a la

presunción de inocencia es el artículo 14 en su párrafo segundo: “Artículo 14: 4. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966).

El artículo 14 en su fracción cuarta nos establece al igual que la mayoría de los cuerpos normativos internacionales que estamos analizando uno de los principios rectores del derecho penal, el derecho humano a la presunción de inocencia.

Este principio busca garantizar que todo ciudadano acusado de la comisión de un delito debería ser tratada como inocente hasta que por medio a juicio se demuestre fuera de toda duda razonable lo contrario de manera legal y con pruebas suficientes dando como resultado una sentencia condenatoria emitida por un juez competente.

Es importante decir que al igual que como si se tratara de un juicio, en un debate sobre la imposición de una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, el peso de la prueba o de generar convicción en el juez para que se imponga dicha medida recae en la parte acusadora, específicamente en el agente del ministerio público pues es el, la figura indicada para la solicitud de la imposición de la prisión preventiva de forma justificada en la audiencia inicial y que debe demostrar más allá de toda duda razonable que la persona de serle impuesta una medida cautelar distinta a la prisión preventiva pueda poner en peligro la seguridad de la víctima o los testigos, el correcto desarrollo del proceso penal o la sustracción de la acción penal por parte del imputado.

En un primer momento este derecho el de la presunción de inocencia es esencial para proteger a los individuos investigados por la comisión de un delito de que se apliquen penas injustas o arbitrarias y asegura que no se pueda privar a nadie de la libertad sin antes haber seguido un proceso judicial adecuado, donde se le respeten las garantías legales a cada imputado y de igual forma el principio de presunción de inocencia también tiene su observancia en la imposición de medidas cautelares

por lo cual implica que las medidas preventivas, como lo bien es la prisión preventiva en cualquiera de sus dos modalidades sus casos de aplicación deben ser excepcionales y aplicadas solo cuando existan riesgos realmente claros y evidentes que pongan en peligro el correcto desarrollo del proceso penal.

En la práctica, este artículo más que nada lo que busca es evitar que derivado de una acusación al existir esta se implique de forma automática un trato degradante e incluso humillante de culpabilidad, protegiendo así lo más posible la dignidad y los derechos del acusado. Además, fomenta que el debate sobre la imposición de medidas cautelares sea un proceso imparcial y objetivo dejando de lado los prejuicios que ponen en desventaja al imputado de esta forma se respetan tanto los derechos del acusado mientras se da prioridad al correcto desarrollo del proceso penal.

4.2.4. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o también conocida como el Pacto de San José esto debido a que es un tratado internacional pactado en 1969 en San José, Costa Rica, tiene como objetivo al igual que la gran mayoría de tratados internacionales proteger y promover los derechos humanos en un determinado territorio, en este caso en la total extensión del continente americano.

Pese a ser pactado en 1969 el pacto de San José entró en vigor en el año de 1978 y es uno de los principales instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es supervisado por la Organización de los Estados Americanos o por sus siglas OEA.

Este tratado logra establecer una serie de derechos en carácter civil, político, económicos y sociales que los Estados que forman parte del pacto se comprometen a garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción y territorio tengan acceso a tales derechos.

Entre los derechos protegidos de forma general podríamos destacar el derecho a la vida, la libertad (Que de cierta forma también se ve mermado por la imposición de medidas cautelares lesivas como lo es la prisión preventiva), la integridad personal, el acceso a un juicio justo, la libertad de expresión y la protección contra la tortura y la esclavitud.

De igual manera la Convención Americana Sobre Derechos Humanos también creó órganos fundamentales para que se pueda garantizar su cumplimiento en los países firmantes entre los cuales podemos destacar La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por sus siglas CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos o conocida más comúnmente como Corte IDH. Estos dos órganos tienen la responsabilidad de monitorear como es la situación en cuestión de los derechos humanos en el interior de los países miembros, de igual manera reciben denuncias y emiten recomendaciones para de esta forma asegurar la protección de los derechos consagrados en la Convención.

En resumen, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de los instrumentos fundamentales para la protección y de igual forma la promoción de los derechos fundamentales en toda la extensión del continente americano al igual que establece mecanismos específicos que deberán asegurar su cumplimiento por parte de los Estados que forman parte de la convención.

En lo relativo a nuestro tema el artículo que tiene mención será el que consagra el principio de presunción de inocencia el cual es el artículo número 8 en su párrafo segundo que a letra dice: “Artículo 8: 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.” (Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 2006)

El principio de presunción de inocencia, tal como es enunciado en este artículo, establece que una persona que es acusada de la comisión de un delito debería ser

tratada como inocente desde el inicio del proceso hasta el final que su culpabilidad sea probada por medio de una sentencia condenatoria conforme a la ley.

Esto quiere decir que, a lo largo de todo el proceso penal, el imputado no podrá ser considerado responsable de la comisión de un delito sin que antes haya un juicio adecuado que compruebe los hechos con base en pruebas legales, misma aplicación y observancia se debería tener en la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva, el ser recluso aunque sea de forma preventiva implica un trato degradante, un trato de culpabilidad anticipada que rompe el principio de presunción de inocencia.

La presunción de inocencia debe proteger a los individuos sujetos a un proceso penal del riesgo de ser castigados o sufrir medidas que tengan consecuencias negativas sin que antes exista una sentencia firme, por medidas nos referimos claramente a la imposición de la prisión preventiva que como principal consecuencia negativa es el trato de culpabilidad que se le da a un imputado al que aún no se le comprueba su culpabilidad dentro de la comisión de un delito causante de un proceso penal.

La presunción de inocencia, además, debe garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo con total imparcialidad, donde los derechos del acusado sean respetados y priorizados en cada una de las etapas del proceso penal, situación que se ve mermada en la imposición de la prisión preventiva pues al ser aplicada esta medida su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia se ven gravemente afectados.

Es importante recordar que la persona acusada no es quien debe probar su inocencia, sino que las autoridades específicamente el agente de ministerio público deben demostrar los riesgos que existen en caso de querer aplicar tal medida cautelar, lo cual pone en una clara desventaja al imputado en el debate sobre la imposición de tal medida cautelar, pues recordemos que no se pueden comprobar los negativos, por tanto el imputado no puede comprobar de forma fehaciente que

él no se sustraería de la acción penal, que su libertad no representaría un peligro para la seguridad de la víctima, los testigos y la sociedad en general y que su libertad no causara problemas ni obstáculos al correcto desenvolvimiento de un proceso penal.

Este principio también buscaría asegurar que, durante todo el proceso penal, incluyendo el debate sobre la imposición de medidas cautelares, no se vea influenciado por prejuicios, de esta forma manteniendo total integridad del proceso judicial y de igual manera evitando que por el simple hecho de que un ciudadano al ser acusado implique algún trato injusto o incluso hasta discriminatorio.

Este derecho es importante para garantizar que todo lo actuado dentro del sistema de justicia penal sea equitativo y apegado a los derechos fundamentales de todas las personas, ya sean imputados, víctimas etcétera.

4.2.5. PRONUNCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN MÉXICO

A continuación, se mostrará la postura que han tomado organismos internacionales en materia de Derechos humanos acerca del uso de la prisión preventiva en México, con la finalidad de evidenciar que esta medida cautelar necesita de manera urgente una reforma que permita abolir la figura de la prisión preventiva de forma oficiosa y hacer más exhaustivo el ejercicio de su aplicación de forma justificada.

4.2.5.1. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana De Derechos Humanos por medio de la sentencia del caso *García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz vs. México* de fecha 25 de enero del 2023 dejó clara la postura sobre el uso de la medida cautelar de la prisión preventiva, en

este caso en su modalidad oficiosa. La Corte en el párrafo 152 de la sentencia declara:

La figura de la prisión preventiva oficiosa que fue aplicada en el caso concreto resultaba contraria per se a la Convención Americana y vulneraba los derechos a la libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana) y a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención). (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2023).

En el párrafo 155 de la misma sentencia refirió:

Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha establecido que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2023)

En el párrafo 172 además la corte redacta que no solo se viola el derecho humano de la presunción de inocencia, sino que de igual manera la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa se considera un acto de discriminación:

Por otra parte, se podría también analizar si la prisión preventiva oficiosa dispuesta en el artículo 19 constitucional vulnera el principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 24 de la Convención Americana puesto que el mismo introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2023)

La Corte determinó que la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa, así como los preceptos legales que la fundamentan, son intrínsecamente contrarios a los derechos fundamentales de toda persona. La Corte en la misma sentencia

afirmó que cuando se encarcela a alguien de forma automática, sin un análisis judicial de su caso particular, se comete una detención arbitraria que vulnera el derecho más básico a la libertad, esta medida cautelar aplicada de forma automática viola el derecho de la presunción de inocencia, pues se trata a la persona como culpable antes de ser juzgada al igual que al ser de carácter oficiosa y no justificada niega el derecho a un control judicial efectivo que evalúe si la prisión es estrictamente necesaria, para la Corte, esta figura es una forma de discriminación, pues priva de un trato igualitario y justo a quienes la ley obliga a encarcelar, sin considerar sus circunstancias, cambiando una premisa muy importante la libertad es la regla y la prisión preventiva la excepción, cuando se aplica de forma oficiosa la prisión preventiva pasa de ser la excepción a ser la regla.

Si bien es cierto que en el caso se critica los preceptos legales de ese entonces en esencia lo que se busca es generar un cambio sobre la medida cautelar de la prisión preventiva en su forma oficiosa y un procedimiento más exhaustivo para la aplicación de la medida de manera justificada.

Otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde expreso su postura acerca de la prisión preventiva fue la del caso Tzompaxtle Tecpile vs México, sentencia que tuvo lugar el 7 de septiembre del 2022.

Es importante mencionar la postura de la Corte sobre esta medida cautelar vigente en México la cual se menciona en el párrafo 162 de la sentencia, que a letra dicta: “La prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022) de esta forma la medida cautelar de prisión preventiva pasa a ser inconvencional, al violar el Derecho Humano de que nadie será sujeto de una pena anticipada.

Otro tema fundamental que toca esta sentencia es el desarrollado en el párrafo 163, que versa de la siguiente forma: “La prevención general” de ciertos delitos, por más graves que sean, o el “efecto disuasivo” no son ni deberían ser funciones de la prisión preventiva” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022), es importante este punto, pues no solo deja ver la postura de la Corte sino que también muestra la postura del Estado, dándole la finalidad de prevención y disuasión,

situación que muestra la mala estrategia y la mala percepción de la problemática real que trae consigo la aplicación de la prisión preventiva.

4.2.5.2. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ONU-DH MÉXICO)

Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el uso de la prisión preventiva es una práctica que vulnera derechos humanos esenciales como lo son la libertad personal y la presunción de inocencia.

Se expidió un documento en agosto del 2024 por parte de la autoridad ya mencionada en el cual se analiza la figura de la prisión preventiva y deja clara su postura acerca del uso de esta medida cautelar en un primer término menciona que:

La imposición de la prisión preventiva automática para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia, pues aquellos acusados de dichas ofensas son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas a la detención, distintas a la privación de la libertad (La ONU-DH, 2024)

esto haciendo referencia claramente a la medida cautelar en cuestión en su forma oficiosa, pues para la fecha de la expedición de dicho documento el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era demasiado extenso, lo cual provocaría que al aplicarse la prisión preventiva de forma automática para estos delitos no permite el uso de demás medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y al ser esta la más lesiva se violenta sin duda el derecho de la presunción de inocencia.

Otro punto bastante importante que se toca en el documento ya referido es el carácter que tiene la prisión preventiva, pues al ser una medida cautelar no debería considerarse una medida punitiva como tal sin embargo para el alto comisionado de

las naciones unidas para los derechos humanos en México esto no es del todo cierto en el documento se explica:

La prisión preventiva oficiosa, al anticipar la barrera de punición del derecho penal en función del delito motivo del proceso, de facto convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada... Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la libertad por motivo de la prisión preventiva y la privación por motivo de una sentencia condenatoria; por lo tanto, la imposición mecánica de la prisión preventiva atendiendo al tipo de delito es violatoria del principio de presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal. (La ONU-DH, 2024).

Es bastante importante el cómo se aprecia la figura de la prisión preventiva oficiosa por esta organización de protección de los derechos humanos, la prisión preventiva se supone que es una medida cautelar y esto quiere decir que su objetivo debería ser asegurar que el proceso penal se desarrolle correctamente bajo las premisas que toda medida cautelar debe tener: Evitar que el acusado se sustraiga de la acción penal, evitar obstáculos a la investigación durante el proceso penal y proteger la seguridad de la víctima así como la de la sociedad.

Sin embargo, la prisión preventiva en su modalidad oficiosa, se aplica de forma automatizada según la comisión de algún tipo de delito sin que se realice un examen exhaustivo acerca de las tres premisas que debe de tener una medida cautelar, al aplicarse de forma automática, sin justificación, la medida deja de ser una precaución procesal y se transforma ahora en un castigo anticipado lo que viene siendo una medida punitiva.

Es comprensible y evidente por qué se considera una medida punitiva pues el imputado es enviado a prisión solo por el delito que se le imputa, configurando así un castigo sin antes existir un proceso penal y una sentencia que declare su culpabilidad. De esta forma la privación de la libertad que sufre un imputado bajo la prisión preventiva oficiosa es idéntica a la que sufre una persona ya sentenciada, provocando que lo que debería ser una medida cautelar sea en realidad una pena.

Al ser considerada una pena y no una medida cautelar se puede deducir que al

aplicar la prisión preventiva oficiosa se atenta directamente contra dos pilares del debido proceso principio de Presunción de Inocencia y Derecho a la Libertad Personal.

4.2.5.3. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA (ONU)

El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria se pronuncio acerca de la prisión preventiva oficiosa el 5 de septiembre del 2022, exhortando a México para que anule dicha medida cautelar que encuentra consagrada como ya vimos en nuestra Constitución.

La presidenta-relatora Miriam Estrada Castillo declaro lo siguiente “La prisión preventiva oficiosa es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos” (ONU, 2022) como ya hemos abordado a lo largo de esta tesis este pronunciamiento reitera nuestra hipótesis, que configura a la prisión preventiva en una figura jurídica que vulnera los derechos humanos.

Además, que se tocó otro tema muy importante en el documento se lee “Anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario.” (ONU, 2022) es importante mencionar el tema de la sobrepoblación del sistema penitenciario en México, ya que más de la mitad de centros de reclusión en México sufren una sobre población y tomando en cuenta que una significativa parte de los reclusos se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva se puede visibilizar una consecuencia grave de esta figura jurídica.

4.2.5.4. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La Comisión Nacional De Derechos Humanos es un organismo nacional que vela

por la protección de los derechos humanos dentro del territorio nacional, en esta temática en particular el 23 de Febrero del 2021 se pronunció en contra de la reforma penal producto del decreto publicado el 19 de febrero del 2021 en el cual el catálogo de delitos graves que ameritaban la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa se incrementaba, en dicho pronunciamiento se expresó la diferencia entre la prisión preventiva de forma justificada y la de manera oficiosa, en el pronunciamiento se lee:

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos no está en contra de la prisión preventiva justificada, que se aplica como último recurso, de manera excepcional, esto es, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, testigos o de la comunidad, o el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado; cuya solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada para que el Juzgador la dicte y garantice los derechos humanos de los involucrados en la investigación penal, esto es que derive de un estricto escrutinio judicial. Sino que está en contra de aquella prisión preventiva que se aplica de manera oficiosa, por imperio de la ley, vulnerando con ello, diversos derechos humanos y contraviniendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la naturaleza propia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues este último, se basa en el otorgamiento de garantías procesales para las partes. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2021)

La postura de la CNDH es clara, en un primer momento expresa que no se encuentra en contra de la prisión preventiva cuando esta se aplica de manera justificada, siempre y cuando se realice el correcto análisis de cada caso en particular y las circunstancias específicas que cada cual tenga, se deja claro que si bien no está en contra cuando la medida cautelar está en su carácter de forma justificada, no menos cierto es que a su consideración primero se deben descartar el uso de las demás medidas cautelares, ya que al ser la prisión preventiva la más lesiva debe tomarse como último recurso para cumplir con los objetivos que tiene una medida cautelar, evitar que el imputado se sustraiga de la acción penal, evitar

obstáculos de la investigación y asegurar el bienestar tanto de la víctima como de la sociedad en general.

La CNDH en un segundo momento se pronuncia en contra de la prisión preventiva cuando esta se aplica de manera oficiosa, cuando se impone por la comisión de uno de los delitos que se encuentran dentro del catálogo de delitos graves, pues a consideración de la CNDH no solamente se violan derechos humanos sino que contraviene la propia naturaleza del sistema penal acusatorio, tomando en cuenta que en el 2008 cuando se da la reforma penal que cambia el sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio oral en primera instancia se realizó esta transición porque este sistema garantizaría la protección de los derechos humanos de las partes dentro de un proceso penal.

Es importante mencionar que antes de este pronunciamiento en el año 2021, la propia CNDH en el año 2019 se pronunció en contra de la prisión preventiva oficiosa de la siguiente manera:

Esta comisión se pronuncia en contra de la prisión preventiva oficiosa, que transgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia y contraviene al derecho internacional de los derechos humanos. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019).

Tal pronunciamiento no es ajeno al resto de pronunciamientos por parte de los organismos protectores de Derechos Humanos sin embargo no solamente se dejó en claro que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos ya mencionados, sino que se planteó la idea de abolir la figura de la prisión preventiva de manera oficiosa en el mismo pronunciamiento.

La CNDH considera que la aplicación de esta medida cautelar de forma oficiosa no es la mejor opción para avanzar en materia de derechos humanos en México, la CNDH lo expuso de la siguiente forma, “El aumento de las hipótesis de la prisión preventiva oficiosa no es la solución a los problemas que México enfrenta en los ámbitos de seguridad y justicia, sino al contrario, debilita la apuesta de nuestro país por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio sin que se haya permitido que el mismo

se implemente, opere y consolide plenamente. Los problemas de inseguridad y falta de acceso a la justicia requieren soluciones integrales, que propicien el respeto y vigencia de los derechos de todas las personas, al igual que el cumplimiento y aplicación de la ley. De lo contrario, no habrá medida o sistema que nos permita acabar con la inseguridad y abatir la impunidad.” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019) Este pronunciamiento no solo es para dejar en claro que la prisión preventiva oficiosa no solo es una medida cautelar violatoria de derechos humanos, sino que deja claro que no se debe seguir utilizando como escapatoria para la inseguridad y deficiencias que se viven en México y en el sistema penal nacional.

Como parte final del pronunciamiento de la CNDH se deja clara la presente idea: “Afirma CNDH que eliminar la prisión preventiva oficiosa de la constitución fortalecerá el debido proceso y la progresividad de los derechos humanos” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019). Desde el 2019 la CNDH dejó en claro su postura acerca de la eliminación de la medida cautelar de la prisión preventiva de forma oficiosa, sin embargo, desde ese momento hasta la actualidad ha sucedido lo contrario, se ha incrementado cada vez más el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva de forma oficiosa y en la última reforma se dejó en claro que el artículo 19 se debe aplicar tal cual está escrito en la ley, haciendo caso de forma literal y prohibiendo cualquier otro tipo de interpretación.

5. CONCLUSIONES Y POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA

Para finalizar la tesis se destinará este capítulo para presentar las conclusiones a las que se ha llegado y en base a eso proponer algunas soluciones viables a la problemática motivo de esta tesis, el uso de la prisión preventiva como medida cautelar en el sistema penal mexicano.

5.1. PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

En cuando a los pronunciamientos de los organismos internacionales podemos clasificar los principales puntos preocupantes en:

5.1.1. EL GRAN INCREMENTO EN SU USO Y EL CÓMO CUESTIONES COMO LA OFICIALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA PROVOQUE SU USO PRÁCTICAMENTE DE FORMA AUTOMATIZADA.

Para algunos de los organismos protectores de derechos humanos que fueron creados gracias a la celebración de tratados internacionales por parte del Estado mexicano, como lo son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o por sus siglas La CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por sus siglas La CIDH en más de una ocasión han señalado que la medida cautelar de prisión preventiva en México se aplica de manera automática en ciertos delitos, hablando claramente de la prisión preventiva de forma oficiosa, lo que ha llevado a que en lugar de ser una medida excepcional y que solo se aplique en casos bastantes específicos y reducidos por las consecuencias que trae consigo la prisión preventiva su uso sea bastante cotidiano.

Para estos ya referidos organismos se contravienen los estándares internacionales y preceptos legales de múltiples tratados internacionales de los cuales México es parte, que exigen que esta medida solo sea aplicada cuando sea necesaria y su

uso se justifique, quedando totalmente comprobado que ninguna otra medida cautelar podría garantizar la presencia del imputado en el proceso penal, la seguridad de las víctimas, los testigos y la sociedad en general además que el proceso penal se desarrolle con la menor cantidad de obstáculos posibles que podrían darse si el acusado no se recluyera de forma provisional.

5.1.2. LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO Y DERECHO HUMANO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA POR LA PRÁCTICA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA

En múltiples ocasiones se ha evidenciado de forma fehaciente que la medida cautelar de la prisión preventiva, tal como se aplica en la actualidad en México, vulnera el principio y derecho humano de presunción de inocencia pues al mantener a una persona imputada sujeta a un proceso penal recluida de forma provisional sin una condena contenida en una sentencia expedida por un juez competente, se les proporciona un trato degradante y humillante al ser tratados como culpables, lo que contraviene en todo sentido los derechos fundamentales.

5.1.3. LAS CONDICIONES EN LAS QUE SON RECLUIDAS PROVISIONALMENTE LOS IMPUTADOS BAJO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA

Es sabido que en México las condiciones en las que se encuentran las personas recluidas sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva en el sistema penitenciario mexicano debería ser una preocupación latente, pues situaciones como el hacinamiento que es un fenómeno que se sufre en la gran mayoría de Centros de Reinserción Social en México.

El hacinamiento sucede cuando existe una sobre población de reos, las condiciones de las instalaciones se vuelven muy precarias, en primer lugar, no parecería que la sobrepoblación de reos fuera un problema que tuviera relevancia sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, pero no hay que olvidar que aproximadamente la

tercera parte de la población carcelaria en México se encuentra recluida bajo la modalidad de prisión preventiva.

La prisión preventiva contribuye en gran medida a la sobrepoblación de reos en cárceles de México lo que genera el fenómeno de hacinamiento además de, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia dentro de las prisiones que son consecuencias secundarias de la gran sobre población carcelaria que se vive en México de esta forma se agrava la situación de los detenidos preventivamente pues hay que recordad que pese la constitución establece que deberán ser recluidos en espacios diferentes y separados de los reos con sentencia eso no sucede en la gran mayoría de cárceles mexicanas pues recluidos por sentencia o por medida cautelar todos se encuentran mezclados.

5.1.4. EL GRAN IMPACTO DESPROPORCIONADO EN CIERTOS GRUPOS

No es difícil notar que la medida cautelar de la prisión preventiva afecta de manera desproporcionada y desigual a personas de bajos recursos, mujeres y comunidades indígenas que pese a ser sectores marginados en este sentido también componen un gran porcentaje de la población en México, estos sectores o grupo marginados son quienes muchas veces carecen de acceso a una defensa legal adecuada, se supondría que cuando un ciudadano no puede costear un abogado particular el Estado proporcionara un abogado de oficio pero si verdaderamente los abogados de oficio estuvieran completamente preparados y no estuvieran familiarizados tan cotidianamente con la medida cautelar de la prisión preventiva sin duda no existirá un gran número de recluidos por esta medida cautelar por lo cual esto profundiza la desigualdad en el acceso a la justicia.

5.1.5. ALTERNATIVAS INSUFICIENTES

Si bien es cierto que la legislación mexicana contempla varias más medidas cautelares que son alternativas a la prisión preventiva, como bien lo es la

abstención de salir de determinado territorio, o no acercarse a determinados domicilios o personas, la supervisión de la autoridad competente de forma periódica etc. , los organismos de derechos humanos han considerado que la aplicación de estas medidas es limitada y no priorizada como debería de ser, lo que conduce a un uso excesivo de la detención preventiva.

Podríamos resumir que los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos coinciden en que el sistema penal de México debería reformar su política de prisión preventiva para adaptarse a los tratados internacionales de lo que México es parte en materia de derechos humanos, se recomienda que se utilicen medidas cautelares menos lesivas y se pongan en marcha mecanismos que aseguren que la prisión preventiva no se utilice de manera generalizada o como una forma de castigo anticipado.

5.2. NECESIDAD DE CAUTELA DENTRO DE UN PROCESO EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO

No es la intención del autor el desacreditar las medidas cautelares y negar su función y necesidad de estas, se reconoce tajantemente que dentro de cualquier proceso penal en nuestro sistema penal actual es completamente necesario la aplicación de medidas cautelares que cumplan con los objetivos que se han analizado en este trabajo, que el imputado comparezca en el proceso penal al que está sujeto, la protección de la seguridad en general incluyendo por lógica a la sociedad, a los testigos y a la o las víctimas de un determinado proceso penal, al igual que este mismo se logre desarrollar sin obstáculos que pudiesen existir por la parte acusada.

Es importante el uso de medidas cautelares en el proceso penal, para que este pueda subsistir, sin medidas que no aseguren el cumplimiento de los tres aspectos ya mencionados, el proceso penal no alcanzaría sus propios propósitos que se encuentran establecidos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos

mexicanos, que entre ellos se incluyen, proteger a la víctima y que el culpable no quede impune y un sistema penal que no pueda garantizar mínimamente estos dos aspectos podría conducir al caos.

Derivado de esto la necesidad de cautela dentro de nuestro sistema penal actual es un criterio válido y esencial para un proceso penal satisfactorio, derivado de esta necesidad de cautela el legislativo mexicano se ha encargado de proveer medidas cautelares variadas y eficientes dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales las cuales ya han sido revisadas en este presente trabajo.

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. (Código Nacional de Procedimientos Penales, 2024)

El uso de las medidas cautelares deberá continuar en su gran mayoría, sin embargo, la última de estas medidas cautelares, considerada la más lesiva, la prisión preventiva en carácter oficiosa y justificada deberían ser eliminada o cuando menos modificadas de forma urgente.

5.3. LA PRISIÓN PREVENTIVA

Después de realizar este trabajo podemos definir a la prisión preventiva, como una medida cautelar actualmente aplicable en el sistema penal mexicano, que recluye de forma provisional a un determinado imputado sujeto a un proceso penal antes de la emisión de una sentencia condenatoria, con el fin de garantizar su comparecencia dentro del propio proceso penal, salva guardar la seguridad en general de la sociedad y las partes del proceso así como el adecuado desenvolvimiento del mismo, aspectos que podrían verse comprometidos si el imputado gozase de su libertad personal.

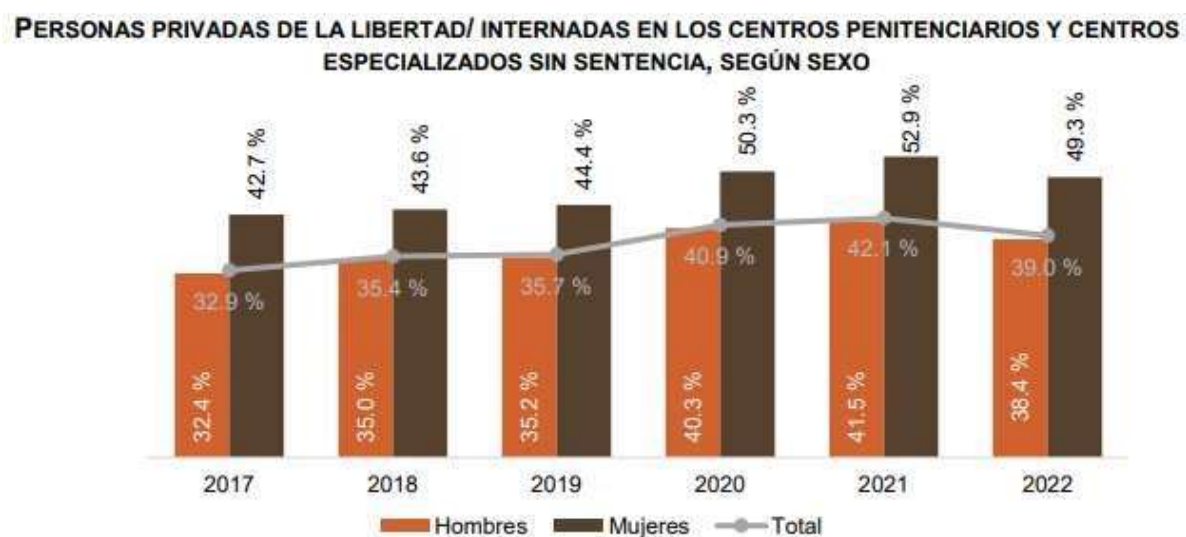
La prisión preventiva al ser una medida cautelar actualmente vigente se le ha sido justificada su existencia por varios aspectos supuestamente positivos, sin embargo, al término de esta tesis hemos podido concluir que los aspectos que buscan justificar su uso no son tan apegados a la realidad o no son completamente verídicos.

5.4. LA PRISIÓN PREVENTIVA SUPUESTAMENTE REDUCE LA INCIDENCIA DELICTIVA

Una de las ideas erróneas del uso de la prisión preventiva consiste en que su práctica puede significar que baje la incidencia en la comisión de delitos, debido a ser una medida cautelar en gran uso y en que consiste en la privación de la libertad de forma anticipada a la sentencia de un juez, generaría en la sociedad el miedo de ser reclusos.

El argumento de generar miedo en la sociedad no debería ser del todo correcto, pues las medidas cautelares de forma teórica no deberían buscar el temor de la sociedad o el temor de los futuros infractores de la ley, los objetivos de una medida cautelar ya han sido expuestos, que el imputado comparezca en el proceso penal, que se salvaguarde la seguridad de la sociedad en general y que se eviten obstáculos al proceso, el miedo no ha sido y no debería ser factor para la invención y práctica de medidas cautelares.

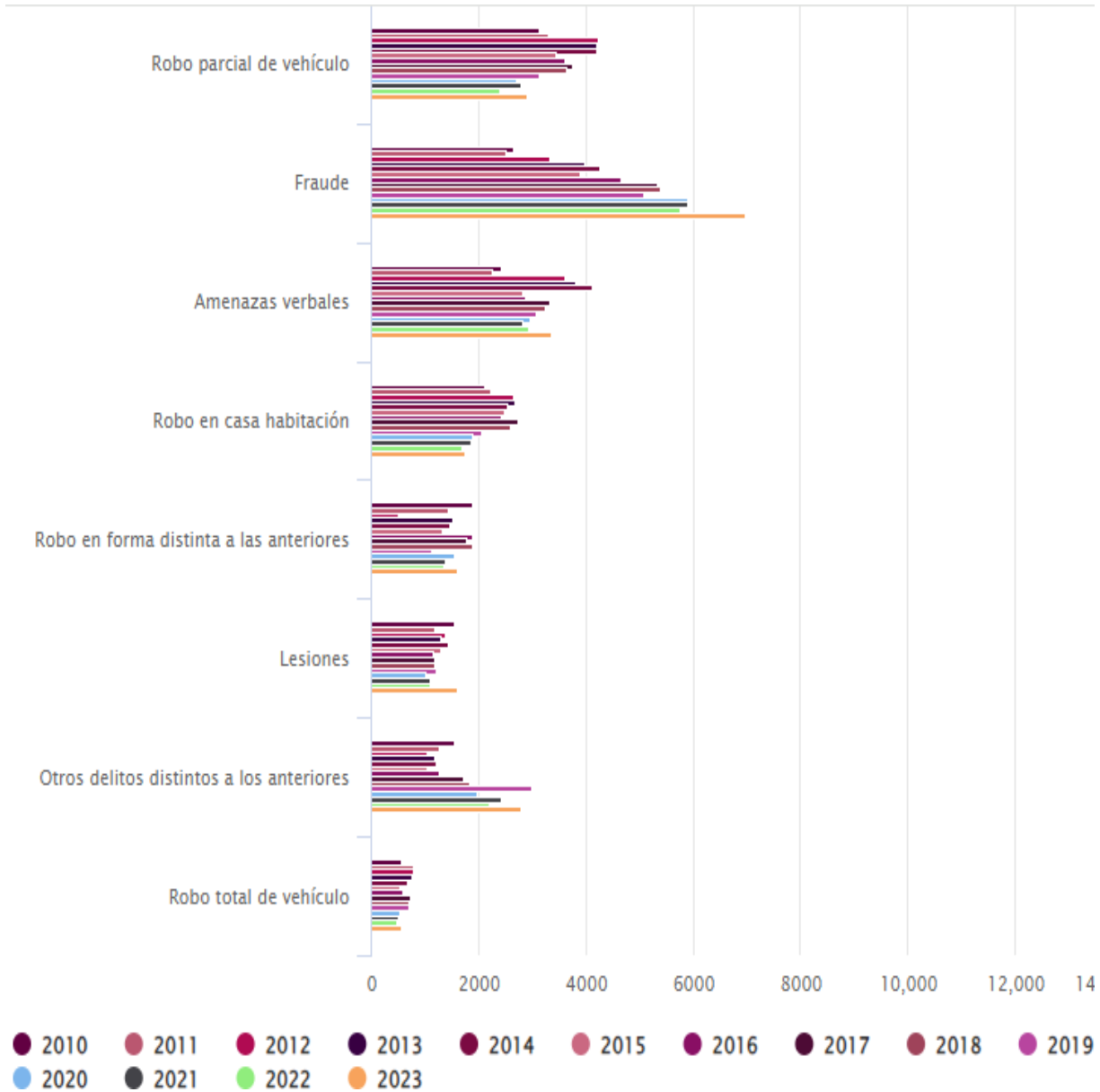
Aun si es que la idea de que una medida cautelar generara el miedo en la sociedad lo suficiente como para evitar la incidencia en delitos varios, la prisión preventiva no sería la medida cautelar idónea para demostrar este argumento, la cantidad de reclusos de forma preventiva bajo esta medida cautelar ha ido incrementando con el paso de los años y la incidencia en la comisión de delitos no ha disminuido exponencialmente y esto lo podemos observar en la siguiente grafica.



(INEGI, 2023)

Según los datos recientes la población carcelaria se encuentra constituida por un enorme porcentaje de reclusos de forma preventiva y con el paso de los años este número ha incrementado exponencialmente, la diferencia de porcentaje más baja se vivió del año 2018 al año 2019 donde el porcentaje de personas reclusas de

forma preventiva solo aumento un 0.3%, sin embargo este porcentaje ha seguido creciendo con el paso de los años, al observar la gráfica se puede apreciar que del años 2021 al año 2022 bajo un 3.1% la cantidad de personas recluidas de forma preventiva sin embargo está lejos de ser una cantidad considerable. En cuanto a la incidencia en actos delictivos podemos observar la siguiente gráfica:



(INEGI, 2024)

Derivado de la anterior grafica podemos observar que la comisión de delitos realmente no se ve afectada o al menos no de una forma significativa por el uso de la medida cautelar de prisión preventiva, desmintiendo completamente el argumento de que la prisión preventiva ha frenado la incidencia en delitos, lo cierto es que cada día se vive un México más violento

5.5. LA PRISIÓN PREVENTIVA SE UTILIZA SUPUESTAMENTE EN IMPUTADOS DE ALTA PELIGROSIDAD

La sociedad podría creer que la medida cautelar de prisión preventiva se aplica ante aquellos imputados que representan un enorme peligro para la sociedad, sin embargo, esto no es del todo cierto, como bien sabemos en México existen dos modalidades de prisión preventiva, la oficiosa y la justificada, la prisión preventiva de forma justificada es aplicable a todo imputado sujeto a un procedimiento penal derivado de la investigación de la comisión de un delito que su pena amerite la privación de la libertad y según el artículo 19 constitucional la prisión preventiva de forma justificada podrá ser solicitada por el agente del ministerio público cuando:

Artículo 19: ...El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso...
(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2024)

Por otro lado, la prisión preventiva de forma oficiosa es aplicada a un catálogo de delitos especificado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual nos menciona:

Artículo 19: ... El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud... (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025)

Si bien ambos preceptos legales sobre la aplicación de la prisión preventiva en cualquiera de sus formas podría dar a entender que la peligrosidad de los sujetos a los que les son aplicadas estas medidas cautelares es clara, la realidad es que no siempre es el caso, no hay que olvidar que para el momento de la imposición de la medida cautelar a ninguno de los imputados se les ha declarado culpables de ninguna conducta delictiva, pues no se ha podido probar su relación con la comisión del delito que haya originado el proceso penal, calificar de peligrosidad a los imputados por el simple hecho de la aplicación de una medida cautelar refleja el cómo los prejuicios afectan negativamente a estos imputados.

Durante el debate sobre la imposición de medidas cautelares no se debería atender como tal la peligrosidad pues termina siendo de igual manera como el aspecto de posible fuga, ambos son aspectos que no están comprobados, son aspectos tomados en cuenta a base de especulaciones, en base a prejuicios y que sin duda alguna violan el principio y derecho humano a la presunción de inocencia, pues al ser tomados en cuenta aspectos como el posible riesgo de fuga y la posible peligrosidades del imputado derivado de la investigación de un delito por el cual se ha iniciado un proceso penal pero que aún no se comprueba su relación con el imputado, no se le da un trato como si fuera inocente, se le trata como si fuese un presunto culpable.

No hay que olvidar que según datos de México evalúa, solo “3 de cada 10 imputados sujetos a prisión preventiva obtienen una sentencia condenatoria” (México Evalúa, 2022), eso quiere decir que solo 30% de los casos de prisión preventiva realmente son encontrados culpables de las conductas de las cuales se les acusa, en otras palabras en la gran mayoría de imputados que sufren la medida cautelar de la prisión preventiva salen en libertad, el 70% de estos imputados no significaban un peligro para nadie, ni representaban un riesgo de fuga y por tanto se debe romper la idea de que la medida cautelar de la prisión preventiva solo se aplica a imputados de alta peligrosidad.

5.6. LA PRISIÓN PREVENTIVA GARANTIZA LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Existe la creencia de que el imputado al estar recluso en un centro penitenciario de forma provisional se le puede garantizar la reparación del daño a la víctima, sin embargo esta idea no es del todo acertada, la reparación del daño se realiza en su gran mayoría de veces por medio del pago de una cantidad monetaria, el hecho es de que el imputado al encontrarse recluso de forma provisional, es separado de su trabajo, lo que le imposibilita generar dinero, a eso sumado el hecho de el gasto económico que se enfrenta al ser parte de un proceso penal hace más difícil para el imputado en caso de ser encontrado culpable el poder pagar la reparación del daño al ofendido.

Es importante mencionar que, en muchos casos las personas sujetas a un proceso penal no cuentan con suficientes recursos para poder garantizar la reparación del daño ni para pagarla en caso de ser hallados culpables, pues de lo contrario una gran cantidad de imputados evitarían la prisión preventiva pagando la fianza o evitarían el proceso penal por medio de una salida alterna que permita el pago de la reparación del daño, sin embargo el sometimiento a la prisión preventiva podría provocar que se incremente de forma exponencial las probabilidades de que el imputado termine en un estado de ser económicamente insolvente.

5.7. LAS CONSECUENCIAS DEL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

La prisión preventiva trae consigo diversas consecuencias, que terminan por afectar a todos dentro del proceso penal, afectaciones para los imputados que son sometidos a esta medida cautelar, así también afectaciones negativas para nuestro sistema penal y por supuesto también afectaciones negativas a la sociedad en general.

Aunque la prisión preventiva es una medida cautelar con los mismos objetivos que las demás los cuales son evitar que el imputado se sustraiga de la acción penal, la protección de la seguridad de la sociedad en general y evitar obstáculos al proceso penal, su uso excesivo y desmedido ha generado impactos negativos de tamaños exorbitantes que podríamos clasificar de la siguiente forma.

5.7.1. CONSECUENCIAS QUE AFECTAN AL IMPUTADO QUE SE LE IMPONE ESTA MEDIDA CAUTELAR

Como ya sabemos el uso de la medida cautelar de la medida cautelar de la prisión preventiva implica que al imputado se le prive de su libertad de forma anticipada a una sentencia condenatoria emitida por un juez competente y esta situación puede afectar su vida en sus aspectos personales, familiares y hasta laborales, afectaciones que muchas veces no son reparables aun cuando se les absuelva o se les declare inocentes dentro del proceso al cual están sujetos.

En cuanto a la percepción de la sociedad, aunque como en la mayoría de los casos se le declare inocente a un imputado sujeto a la medida cautelar de la prisión preventiva, el hecho de ser recluido en un centro de reinserción social o un reclusorio es una situación que lo marca ante el ojo público de la sociedad, afectando de gran manera su reputación y por su puesto su imagen pública, estigmatizándolo y llenando de prejuicios la sociedad hacia su persona.

En cuanto a la cuestión psicológica, el tiempo que un imputado sujeto a la medida cautelar de la prisión preventiva pase recluido en un espacio donde como ya hemos visto debido a la sobrepoblación de reos en su gran mayoría no es en un espacio especializado sino más bien es en el mismo espacio y tiempo en el que se encuentran recluidos aquellos sentenciados, puede generarle a aquel recluido provisionalmente, niveles altos de estrés, depresión, ansiedad, así como la agravación de cualquier otro problema de salud mental que este ya padezca, afectando la salud mental de determinado imputado de forma negativa.

Afectaciones de carácter económicas y laborales, cuando un imputado al que se le impone la medida cautelar de prisión preventiva es recluido de forma provisional, este pierde toda capacidad de poder trabajar y generar ingresos de la forma que lo podría realizar de encontrarse en libertad, esto puede traerle como consecuencia al imputado recluido anticipadamente la pérdida de su empleo y esto traería como consecuencia la imposibilidad de cumplir sus responsabilidades con su familia (en

caso de tenerlas) al igual que no estaría en posibilidad de afrontar muchos gastos que conlleva el ser parte de un proceso penal.

La reinserción social es otro aspecto que se ve afectado por el uso de la medida cautelar de la prisión preventiva, aunque se dé el caso en que el imputado logre ser declarado inocente y ser absuelto del proceso penal, lamentablemente el tiempo ya transcurrido dentro de un centro de reinserción social o reclusorio bajo la modalidad de prisión preventiva, puede dañar de forma irreversible su vida social, dificultando de esta forma el que este ciudadano se vuelva a reintegrar a la sociedad de forma satisfactoria, afectando incluso sus relaciones interpersonales y su forma de concebir a la comunidad y su forma de relacionarse con los demás miembros de esta.

5.7.2. CONSECUENCIAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA QUE AFECTAN EL SISTEMA PENAL

Como bien sabemos las consecuencias que trae el uso desmedido de la prisión preventiva no solo son aplicables a los miembros parte del proceso penal, sino que también afectan a las estructuras del sistema penal como se trata de evidenciar en los siguientes aspectos.

Una consecuencia clara del uso desmedido de la prisión preventiva es el famoso hacinamiento de las cárceles mexicanas, como ya lo hemos visto en la presente tesis el hacinamiento de cárceles se da cuando hay una sobrepoblación carcelaria, generando un desgaste mayor de las condiciones con la que cuentan estos centros de reclusión, afectando en gran medida la vida de las personas que se encuentran reclusas en estos espacios, entre las principales consecuencias que genera el hacinamiento se encuentran el incremento exponencial de la violencia dentro de las cárceles, la falta de recursos dentro de estos centros de reclusión y las malas precarias condiciones de salud, aseo etc. En las que viven los reclusos dentro de

estos espacios.

Otra de las consecuencias que sufre el sistema penal es el desgaste de recursos, al tener que mantener dentro de estos centros de reclusión a una enorme cantidad de personas, se genera un desgaste de recursos exorbitantes, pues mantener a una gran cantidad de reos significa un alto costo para el presupuesto de gastos, de esta manera se tienen que incrementar los recursos destinados a este ámbito, recursos que podrían ser aprovechados de mejor manera en otros aspectos si no fuese porque el número de gente reclusa incrementa año con año.

Otro aspecto a tomar en cuenta como consecuencia del uso de la medida cautelar de la prisión preventiva es, la gran sobrecarga que tiene el sistema judicial, se sabe que el sistema judicial mexicano se encuentra rebasado, el sistema se encuentra super saturado y para los jueces el poder utilizar esta medida cautelar puede ser un recurso de conveniencia sin embargo el uso de esta medida cautelar retrasa aún más los procesos penales y las resoluciones a estos.

5.7.3. CONSECUENCIAS DEL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA QUE AFECTAN A LOS DERECHOS HUMANOS

Como ya hemos visto en la presente tesis, la práctica de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva en México, significa una violación a los derechos humanos reconocidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos y contenidos en múltiples tratados internacionales de los cuales México es parte, razón por la que múltiples organismos en carácter de derechos humanos han realizado en múltiples ocasiones observaciones a México por el uso desmedido de esta medida cautelar.

Cuando la prisión preventiva es aplicada sin justificación puede significar violación

a los derechos humanos de libertad personal y presunción de inocencia, como hemos visto dentro de esta tesis cuando se da el momento del debate para la imposición de medidas cautelares (debate que en promedio dura de 10 a 15 minutos normalmente) este acontece con prejuicios y claramente el imputado es quien tiene una desventaja, se toman a consideración la probable peligrosidad del imputado y la probable sustracción de la justicia, es importante recalcar que se toman en cuenta estos factores de forma probable, situación totalmente injusta pues se basan en prejuicios sobre situaciones que aún no suceden o que aún no tienen una relación clara con el imputado, violando su derecho humano a la igualdad dentro de un proceso penal, su derecho a presunción de inocencia, el ser tratado como una persona inocente hasta que no quede comprobado fuera de toda duda razonable su relación con la comisión de un delito y al ser recluido sin existir una condena se viola su derecho a la libertad personal.

La justicia y la percepción de esta por la sociedad es otro derecho humano de todos que se ve vulnerado por el uso desmedido de la medida cautelar de la prisión preventiva, la percepción que se tiene de la justicia por la prisión preventiva es gravemente afectado, por aquellos que vemos la prisión preventiva como un acto violatorio de los derechos humanos y por aquellos que sufren esta medida cautelar sin duda viven en carne propia lo que es la violación de derechos humanos y esto ocasiona un desgaste a la confianza en el sistema de justicia penal y las instituciones del Estado.

5.7.4. CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL POR EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

El uso desmedido de la medida cautelar de la prisión preventiva también afecta a la sociedad en general y eso lo podemos observar en los siguientes aspectos.

El aumento de la marginalización, la prisión preventiva es una problemática que

afecta a todos los sectores de la sociedad sin embargo siempre existen sectores de la sociedad más afectados que los otros, estos grupos vulnerables cuando son sometidos a la prisión preventiva pueden ser afectados en mayor manera tanto en el tiempo de la reclusión como la etapa después de su liberación, enfrentando dificultades aún mayores para reintegrarse en la sociedad o incluso en el ámbito laboral.

La criminalización de la pobreza, en muchos casos, la prisión preventiva llega a afectar de forma desproporcional a los miembros de sectores de escasos recursos, quienes no tienen la posibilidad de pagar abogados de buena calidad o permitirse el acceso a otras medidas cautelares como lo son las fianzas, de esta forma se mantiene la desigualdad para el acceso a la justicia de estos grupos vulnerables.

5.7.5. CONSECUENCIAS EN LA EQUIDAD DEL PROCESO PENAL POR EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Derivado del uso de la medida cautelar de la prisión preventiva, se logra como consecuencia también un desequilibrio entre la parte acusadora y el imputado, pues además de que el debate para la imposición de medidas cautelares viene acompañada de prejuicios que no le benefician para nada también es verdad que al ser ya recluso, la capacidad para poder reunir pruebas y coordinar su estrategia con su cuerpo legal defensor se ve completamente afectado por su confinamiento, evitando una igualdad de condiciones entre las partes de determinado proceso penal.

Otro aspecto a analizar como consecuencia dentro del proceso penal por el uso desmedido de la prisión preventiva es el fomento de un castigo anticipado, en algunos casos, la prisión preventiva puede pasar a verse como un castigo anticipado

en caso de ser declarados culpables y también puede ser visto como un castigo sin razón cuando el imputado es declarado inocente.

En conclusión, la medida cautelar de la prisión preventiva aunque fue diseñada al igual que el resto de medidas cautelares para cumplir con sus objetivos de evitar que el imputado se sustraiga de la acción penal, salvaguardar la seguridad de la sociedad en general y que el proceso siga su cauce de forma adecuada sin obstáculos, atendiendo así la necesidad de cautela, también es verdad que ha sido la medida cautelar más lesiva y que como ya hemos visto sus consecuencias son demasiadas y sus beneficios podrían ser proporcionados por otras medidas cautelares, sus consecuencias impactan de gran manera la vida de los imputados víctimas de esta medida cautelar, se afecta el sistema penal, agrava la condiciones de los centros de reclusión y su práctica sin duda violan los derechos humanos, por ello es de gran importancia modificaciones su procedencia y aplicación atendiendo los principios de excepcionalidad, justificación y proporcionalidad, también priorizando el uso de alternativas que sean menos restrictivas y estén contenidas dentro del catálogo de medida cautelares aplicables en México.

5.8. POSIBLES SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Una vez terminado la presente tesis, tenemos un panorama completo acerca de esta medida cautelar, acerca de su historia y su evolución, acerca de sus modalidades y finalidades, pero también un panorama completo de sus consecuencias y afectaciones a múltiples aspectos y es por tal motivo para el autor es necesario modificaciones en cuanto al uso de la medida cautelar de la prisión preventiva en el sistema penal mexicano actual.

La prisión preventiva consta de dos modalidades, la oficiosa y la justificada, para este autor es necesario adaptar cada una para evitar en mayor medida las

consecuencias negativas que ya se han referido en esta tesis.

En cuanto a la prisión preventiva de forma oficiosa, llegó a la conclusión que debe de ser totalmente prohibida para la gran mayoría de los delitos.

5.8.1. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

La prisión preventiva de forma oficiosa hay que recordar que es la medida cautelar por medio la cual se recluirá de forma provisional a un determinado imputado de forma automatizada por la comisión de un delito considerado grave, contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los cuales en la actualidad se contienen:

Artículo 19: ... El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud... (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2024)

Para este autor el catálogo de delitos a los cuales es aplicable la prisión preventiva en su carácter oficiosa deberá reducirse y únicamente contener los delitos graves que se consideren pongan en peligro la seguridad de la nación los cuales a día de hoy según el Código Penal Federal son: “Traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, financiamiento de terrorismo, sabotaje y conspiración” (Código Penal Federal, 2024)

A consideración de este autor, son los únicos delitos a los cuales se les podría aplicar una medida cautelar como la prisión preventiva de forma oficiosa, por la naturaleza de estos delitos y que por el gran riesgo que conllevan conductas delictivas de ese nivel, tanto como para poner en peligro la seguridad de toda una nación.

Para el resto de las conductas dentro del catálogo de delitos graves del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el autor de la presente tesis considera se debería aplicar la prisión preventiva en su carácter justificada siempre y cuando se cumplan con las regulaciones que a continuación expongo.

5.8.2. PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA

Actualmente la prisión preventiva en su modalidad justificada se encuentra fundamentada en el artículo 19 constitucional el cual nos menciona:

Artículo 19: ...El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso... (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2024)

Para este servidor debería eliminarse la última parte que nos habla acerca de un criterio para la procedibilidad de la prisión preventiva de forma justificada que es que el imputado haya sido sentenciado con anterioridad por un delito de comisión dolosa, para criterio de este servidor ese factor implica la violación al principio rector del sistema penal mexicano actual, no ser juzgado dos veces por la misma cosa, el hecho de tomar en cuenta una sentencia condenatoria anterior ya compurgada implica que al ex convicto y ahora imputado se le señale y se le juzgue ahora para la imposición de una medida cautelar un acto que si bien es delictivo ya fue compurgado, ya se cubrió la deuda con la sociedad y se supondría el determinado imputado ya se habría re incorporado a la sociedad como un miembro funcional, el hecho de tomar en cuenta este factor es un claro ejemplo de cómo el sistema, señala, perjudica y discrimina sin razón válida a un determinado imputado dentro de un proceso penal.

Continuando con otro punto a modificar de la prisión preventiva en su forma justificada es hacer caso de forma correcta a lo estipulado por lo expuesto en la primera parte del artículo 19, aplicar la prisión preventiva justificada cuando ninguna otra medida cautelar sea capaz de cumplir con los objetivos de una medida cautelar, que el imputado no se sustraiga de la acción penal, que se garantice la seguridad de las víctimas, testigos y la sociedad en general y que el proceso penal pueda seguir su cauce sin obstáculos.

La única forma poder garantizar que ninguna medida cautelar es suficiente para cumplir esos objetivos y así poder aplicar la prisión preventiva en su modalidad justificada será después de la imposición de medidas cautelares diversas a esta y que se demuestre que en efecto no fueron suficientes para cumplir con los objetivos de una medida cautelar, de lo contrario basar el debate en un “hubiera” o en un “probable” ya sea riesgo de fuga o de cualquier incumplimiento de los objetivos de

una medida cautelar, perpetuaría que el debate sobre la imposición de medidas cautelares fuese pre juicioso e inclinado en contra hacia el imputado que no se encuentra en la posibilidad de poder probar que no se violara ningún objetivo de una medida cautelar, de esta forma de igual manera se le dará el carácter de excepcionalidad al uso de esta medida cautelar pues solo se aplicará cuando verdaderamente no quede duda alguna de que ninguna medida cautelar sea suficiente para garantizar los objetivos de la misma.

En cuanto al uso de diversas medidas cautelares a la prisión preventiva al día de hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla las siguientes:

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares:

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. (Código Nacional de Procedimientos Penales, 2024)

En cuanto a la implementación de nuevas medidas cautelares este autor considera que las ya existentes son suficientes sin embargo no se les da el uso a dos de las medidas que sin duda pueden remplazar la medida cautelar de la prisión preventiva de forma justificada, estas dos medidas cautelares son la colocación de localizadores electrónicos y el resguardo domiciliario este por medio de dispositivos electrónicos.

Estas dos medidas que implementan el uso moderno de geo localizadores, brazaletes electrónicos, módems de los cuales no se puedan alejar de los límites para el cuales se le programen etc. existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales sin embargo su aplicación se da muy rara vez, ya que siempre que son solicitados ante un juez, este refiere que el Estado carece de recursos para poder implementar esta medida cautelar, sin embargo se ha llegado aplicar gracias a que el determinados imputados se han encontrado en la capacidad de poder adquirir estos servicios de forma privada mediante algunas empresas que especifican en este mercado, sin embargo repito ha sido a costa del propio imputado, algo totalmente injusto tomando en cuenta que es una medida cautelar que se ofrece en el catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales pero el Estado nunca lo ha cubierto.

El Estado se ha manifestado en este aspecto y ha dicho que el uso de estas medidas cautelares implican un gasto enorme al presupuesto sin embargo, ¿Que tan valido es este argumento?, como bien sabemos la prisión preventiva realmente si implica un gasto al Estado y tomando en cuenta que la implementación en gran medida la prisión preventiva genera Hacinamiento dentro de las cárceles mexicanas, el gasto de recurso en estos espacios es bastante grande, tan grande que si aquellos reclusos bajo la modalidad de prisión preventiva no estuvieran reclusos de forma provisional el dinero ahorrado alcanzaría y sobraría para que el Estado

implementara estos mecanismos electrónicos.

Baso el argumento del párrafo anterior en lo siguiente: Según Forbes “Los presos penales pueden llegar a costar hasta ciento noventa y dos mil pesos al mes” (Forbes, 2021). De acuerdo al gobierno de México, el gasto promedio al mes en los centros penitenciarios es de 114,588.72 pesos al mes. La secretaria de seguridad y protección ciudadana de la CDMX Rosa Icela Rodríguez declaro que el gasto promedio por interno es de \$500 diarios, o sea \$15,000 pesos al mes, o sea \$180,000 pesos anuales.

En contraste con el costo de los brazaletes electrónicos las empresas de este campo tienen unos precios que oscilan los \$5,500 mensuales o sea \$66,000. Pesos al año, cifra que es mucho menor a la de cualquier estadística en cualquier centro penitenciario en la república mexicana y la CDMX.

Por último, de igual manera deberían construirse espacios específicos para aquellos reclusos de forma preventiva para que no se encuentren en el mismo espacio y tiempo que aquellos que están compurgando una pena, de esta forma se reduciría aún más la población carcelaria y evitaríamos las consecuencias psicológicas que sufren los imputados reclusos de forma preventiva durante el proceso y su etapa durante la reinserción social.

REFERENCIAS

- Agroasemex, S.A. (13 de septiembre de 2019). *Gobierno de México. 209 aniversario de la independencia de México*. Obtenido de <https://www.gob.mx/agroasemex/es/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico?idiom=es>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). *nacionesunidas.org. La Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Obtenido de <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Bazan, A. M. (2016). *Las medidas cautelares y la prisión preventiva en el nuevo sistema acusatorio adversarial. Página 130* Revista de investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica. Puebla. Dike.
- Centro de Estudios de Justicia de las Américas. (2013). Prisión Preventiva en América Latina: Enfoques Para Profundizar el Debate. Santiago, Chile: CEJA. Libro Consultado: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30357.pdf>
- Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. (1993). Texto recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cfpp/CFPP_abro.pdf
- Código Penal Federal. (07 de abril de 2024). *diputados.gob.mx*. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf>
- Código Penal para el Estado de Hidalgo. (09 de febrero de 2024). *diputados.gob.mx*. Obtenido de https://www.congreso.hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Codigo%20Penal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
- Código Procesal Penal de Bolivia*. (2000). Bolivia. Obtenido de: <https://scm.oas.org/pdfs/2010/CIM02724T-G.pdf>
- Código Procesal Penal de Costa Rica*. (1996). Costa Rica. Obtenido de: https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo

.aspx?nValor1=1&nValor2=41297

Código Procesal Penal de El Salvador. (1996). El Salvador. Obtenido de:
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_slv_procesal.pdf

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (6 de febrero de 2019). *cndh.org.mx*.
Obtenido de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-02/Com_2019_041.pdf

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (23 de febrero de 2021). Obtenido de
cndh.org.mx: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-02/Pronunciamiento_Reformas_19feb.pdf

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Julio de 2024). *Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria*. Obtenido de
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-12/DNSP_2024.pdf

Constitución Política de la República Mexicana 1857. (1857). Obtenido de:
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/federal/historicos/1857.pdf>

Constitución Política de la Monarquía Española (1812). Obtenido de:
<https://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/public/libelec/cons1812.htm>

Constitución política de Apatzingán. (1814). México. Obtenido de:
https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1814-Decreto-constitucional-para-la-libertad_Apatzingan.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, reforma de 1948). México. Obtenido de:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/decretos_reformas/2016-12/00130030.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, reforma de 1985). México. Obtenido de:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/decretos_reformas/2016-12/00130128.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, reforma de 1993). México. Obtenido de: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/decretos_reformas/2016-12/00130022_3.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917, reforma del 2008). México. Obtenido de: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/decretos_reformas/2016-12/00130197_7.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (30 de septiembre de 2024). *diputados.gob.mx*. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (15 de 04 de 2025). *diputados.gob.mx*. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Constitución política federal de los Estados Unidos Mexicanos. (1824). México. Obtenido de: <https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1824- Constitucion-Federal.pdf>

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (27 de septiembre de 2006). *oas.org*. Obtenido de https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (25 de enero de 2023). Obtenido de [internacionalesddhh.segob.gob.mx](http://www.internacionalesddhh.segob.gob.mx): http://www.internacionalesddhh.segob.gob.mx/work/models/CAIDH/Documentos/PDF/Sentencia_Garcia_Rodriguez_y_ReyesAlpizar.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (07 de septiembre de 2022) Obtenido

- de [internacionalesddhh.segob.gob.mx:
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf](https://internacionalesddhh.segob.gob.mx:https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf)
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (08 de 10 de 2017). cndh.org.mx. Obtenido de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Declaracion_ADDH.pdf
- Forbes. (13 de enero de 2021). forbes.com.mx. Obtenido de www.forbes.com.mx/politica-internos-penales-hasta-192-mil-pesos-mes/
- Gozaini, O. A. (2014). *Cuadernos de Divulgación de la justicia electoral pagina 13*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Gutiérrez, J. C. (19 de 08 de 2008). *Archivos Jurídicas UNAM*. Obtenido de [www.juridicas.unam.mx:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/12.pdf](https://www.juridicas.unam.mx:https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2562/12.pdf)
- Herrera, J. H. (2017). *Las medidas cautelares en la legislación procesal penal mexicana. Página 14 México: FICP*.
- IMCO. (2005). Obtenido de imco.org.mx: <https://imco.org.mx/justiciapenal/blog/definicion/prision-preventiva/>
- INEGI. (17 de Julio de 2023). inegi.org.mx. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CNSIPE-E-F/CNSIPEE-F2023.pdf>
- INEGI. (15 de enero de 2024). inegi.org.mx. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/>
- La ONU-DH. (agosto de 2024). hchr.org.mx. Obtenido de <https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2024/08/2024-08-Observaciones-sobre-la-Prision-Preventiva-Oficiosa.pdf>
- Lecuona, G. Z. (2010). *Los mitos de la prisión preventiva en México*. México: Open

Society Institute.

Memorica. (15 de marzo de 2019). *memoricamexico.gob.mx*. Obtenido de <https://memoricamexico.gob.mx/es/memorica/Temas?ctId=3&cId=MGE2NDNmMWQtMWYwZC00Y2VhLWEzZmQtOTY4MGMyNzUzMjE3&cd=false#inicio>

Menéndez, M. A. (1982). *Antecedentes Legislativos e Inconstitucionalidad de las Normas Minimas*. México: Revista Criminalia.

México Evalúa. (12 de mayo de 2022). *mexicoevalua.org*. Obtenido de <https://www.mexicoevalua.org/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados/>

Obregón, T. E. (2004). *Apuntes para la historia del Derecho Mexicano*. México: 3era Edición Porrúa.

ONU. (5 de septiembre de 2022). *Organización de Naciones Unidas*. Obtenido de <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/mexico-should-overturn-mandatory-pre-trial-detention-un-experts>

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (16 de diciembre de 1966). *ohchr.org*.

Obtenido de <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

Penales, C. N. (26 de enero de 2024). *Gobierno de México*. Obtenido de [diputados.gob.mx: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf)

Ramírez, S. G. (1993). *El Sistema Penal Mexicano. Página 169* México: Fondo de Cultura Económica.

Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. (1822). México.

Roxin, C. (2003). *Derecho Procesal Penal. Pagina (257)* Buenos Aires: Editores del Puerto.

Tallarico, A. N. (2020). *Prisión preventiva reflexiones sobre su uso y abuso*. Santa Fe: Doctrina.

Torruco, J. G. (2013). La constitución de Cádiz de 1812 en México. En J. G. Torruco, *La constitución de Cádiz de 1812 en México* (pág. 253). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas- Senado de la República.

Valdez, C. G. (1982). *Estudios de Derecho Penitenciario*. Madrid: Tecnos S.A.

Zaffaroni, R. E. (2007). *Manual de Derecho Penal. Pagina 78* Buenos Aires: Ediar.